

6705



CEPAL

Programa de Recursos Naturales y Energía
Octubre 1964
Santiago, Chile

SOLO PARA CRITICAS Y COMENTARIOS

LOS RECURSOS HIDRAULICOS DE ARGENTINA

Análisis y programación tentativa de su desarrollo^{*}

PORTE VII

Anexo III

LAS INSTITUCIONES PROVINCIALES DE ADMINISTRACION HIDRICA

^{*}/ Esta es la versión preliminar del Informe, que se circula a objeto únicamente de discutirlo con las autoridades y técnicos argentinos que participaron en la preparación del material, antes de su redacción definitiva. Las cifras y análisis están, pues, sujetos a revisión. Se ruega no citar.

Anexo III

LAS INSTITUCIONES PROVINCIALES DE ADMINISTRACION HIDRICA

1. Contenido de este Anexo

1. Se examinan aquí las agencias administrativas provinciales responsables de la administración hídrica en general, esto es, las que se refieren a todos o más de un uso, y particularmente, las que ejercen la autoridad y el poder de policía hídrica. En el capítulo 4, donde ha sido hecho el estudio por usos y efectos nocivos de las aguas, se ha hecho referencia, provincia por provincia, al tratar cada uso en particular, a las agencias responsables del manejo de las aguas en relación a él, y a las que ejercen actividades "empresarias", esto es, de prestación de servicios públicos.

El régimen financiero ha sido estudiado, también en relación a las provincias, en el capítulo 2,F.

Las agencias interprovinciales han sido tratadas en el capítulo 2,K,3.

Así pues el lector interesado en conocer todas las instituciones de administración hídrica de una determinada provincia, debe, a más de leer el apartado pertinente del presente Anexo, buscar más antecedentes en los otros capítulos del documento principal que se dejan enumerados.

2. Provincia de Catamarca

2. La actividad de su gobierno en materia de prospección, medición y evaluación de sus recursos hídricos es prácticamente nula, pues ni siquiera son cumplidas las normas de su legislación que obligan a registrar los usos bajo concesión, y sólo son acatadas en algunas regiones las que obligan a instalar "marcos partidores" para la medición del agua que recibe cada usuario.

3. La programación del desarrollo hidráulico tampoco ha sido abordada como tarea orgánica. El cuadro A ofrece una nómina de 26 leyes dictadas en sólo 16 años ordenando estudios u obras hidráulicas singulares, en diferentes lugares, que no responden a un plan. Hay en él además 3 leyes que aprueban planes generales de obras públicas (hidráulicas o no) que no son tales planes si no meras nóminas de proyectos.

Quadro A

LEYES DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA AUTORITATIVAS DE ESTUDIOS U OBRAS
HIDRAULICAS (1945-1962)

Ley Nº	Año	Lugar y clase de obra
CM/1312	1945	Arroyo La Zanja - Estudios
1330	"	Dpto. Capayán - Obras hidráulicas
1331	"	La Guarda - Obras hidráulicas
1337	"	Fray M. Esquié - Obras hidráulicas
1339	1946	Río del Valle - Expropiación terrenos por embalse
1428	1947	Plan general de Obras Públicas, incluso hidráulicas
1452	1948	Plan general de Obras Públicas, incluso hidráulicas
1472	1949	Plan general de Obras Públicas, incluso hidráulicas
1521	1949	Río Las Tablas - Desviación
1751	1958	Río Belén - Dique
1752	1958	Río Las Tunas - Embalse
1777	1958	Río PACLIN - Dique
1787	1959	Río Capayán - dique nivelado
1789	"	La Banda - Canal
1792	"	Pajonal - Canal
1808	"	Ríos El Cercado y La Dorada - Estudios
1828	"	Río Potreros - Dique
1841	"	Río Entre Ríos - Defensas
1849	"	Pomán - Dique
1867	"	Chumbicha - Dique y canal
1900	1960	San Pedro - Dique y canal
1910	"	Río Ampajango - Estudios
1916	"	Capayán - Estanque de almacenamiento
1920	"	Arroyo Los Reinacos y Quebrada Los Varela - Estudio de embalse
1994 1994	"	Antinaco - Represa
2031	1961	Río Santa Cruz - Defensas
2033	"	Proyecto canal riego
2044	"	Construcción canal riego
2050	"	Puerta Corral Quemado - Canal

4. No existe coordinación alguna entre las distintas agencias provinciales que manejan agua (CM/DPA, CM/DGE, CM/DGM, CM/MUN, CM/OPP), ni menos entre ellas y las oficinas locales de agencias nacionales implicadas en el manejo de recursos hidráulicos (N/AEE, N/OSN, N/DNGM).
5. La autoridad provincial de control y policía de las aguas es la Dirección Provincial de Aguas (CM/DPA) jerárquicamente dependiente del Ministerio de Obras Públicas, creada por una ley de presupuesto, que absorbió las funciones que la Ley CM/655 (1900) asignó al Departamento General de Irrigación. La CM/DPA se divide en 3 departamentos: Estudios y Proyectos, Construcciones, e Irrigación. El segundo se ocupa del suministro de agua potable y de la construcción de obras con ese fin. El tercero es la autoridad prevista por la ley CM/655 es decir, el Departamento General de Irrigación, que administra los cauces naturales y los canales construidos por la Provincia, lleva el Registro de Derechos de Aguas y aprueba toda obra hidráulica privada. Su jefe es el Superintendente General de Irrigación, designado por y dependiente del P.E. provincial, no obstante que la ley CM/655 (Arts. 9 y 10) le reconoce autarquía. De él dependen jerárquicamente Jueces Departamentales de Irrigación, cuya jurisdicción está fijada a base de límites políticos (departamentos) y no por cuencas ni por sistemas de distribución de aguas. Les compete distribuir las aguas entre los canales de su jurisdicción y entre los usuarios. Estos jueces son electos por los usuarios, quienes pagan a prorrata sus sueldos y los gastos de conservación y administración de sus respectivas obras y canales. Cuando la elección no es hecha oportunamente, los comisarios de policía cumplen sus funciones. Los Tenientes de acequias o de canales son sus asistentes, ejecutan sus órdenes en el terreno, y hacen la distribución material de las aguas y cuidan de la limpieza de los canales. La ley CM/655 prevé además un Juez General de Región para el caso de los ríos que riegan más de un departamento político, que debe residir en el situado más aguas abajo, y que tiene como asistente, designado por él, a un Inspector de Río.
6. Como ya se dijo en otro lugar, la CM/DPA concurre con N/AEE en la prestación del servicio de suministro de agua de riego y con N/OSN y N/AEE en el servicio de agua potable.
7. La Dirección General de Energía (CM/DGE) dependiente jerárquicamente del mismo Ministerio, se ocupa de la generación y suministro de electricidad (hidráulica y térmica), en concurrencia con N/AEE y algunas municipalidades.

No es autoridad eléctrica, porque ninguna ley provincial regla el servicio público eléctrico. Las concesiones de agua para uso hidroeléctrico deben ser pedidas a través de la CM/DPA.

8. De las aguas subterráneas se ocupa la Dirección Provincial de Geología y Minería (CM/DGM) a través de la División Hidrogeología y Perforaciones de su Departamento de Geología. Pero sólo cumple funciones de prospección, y no de control del uso, ni perfora para alumbrar aguas. Esto último por carencia de medios materiales, y el control por falta de reglamentación legal. Concorre con la N/DNGM, que si bien no ejerce autoridad, realiza tareas de prospección y perforación el territorio provincial.

9. La CM/DPA cumple funciones jurisdiccionales, esto es de juez administrativo (principalmente en lo que atañe a la distribución de las aguas), y excepto cuando se discute el dominio o la concesión de aguas, o la imposición de servidumbres, lo que compete a los jueces civiles. Las decisiones administrativas son recurribles por vía contencioso-administrativa, cuya última instancia es la Suprema Corte Provincial. A su vez la CM/DPA es juez de alzada administrativa de las decisiones de los jueces departamentales de irrigación, en materias de distribución, turnos, trabajos de conservación, etc.

3. Provincia de Córdoba

10. La ley CB/4144 (1953) reorganiza la Dirección Provincial de Hidráulica (CB/DPH), que es allí la autoridad de aguas. No hay en Córdoba obras de riego administradas por la Nación. Pero N/AEE opera los diques de embalse que la Nación construyó de acuerdo con CB/DPH, pues el uso hidroeléctrico concierne a N/AEE, la que luego vende la electricidad, en barra, a CB/EPEC. Para cada dique rige un convenio con la Nación. Véase las leyes aprobatorias en el Repertorio.

La CB/DPH tiene relativa autarquía, pues si bien la ley parece dársela, la retacea considerablemente. Así, el personal es designado por el P.E. provincial, aunque a propuesta del Directorio, y las decisiones de éste deben ser homologadas por el P.E. Ambos aspectos sujetan a CB/DPH a la política partidista, en desmedro de su eficiencia. Los planes de trabajo y proyectos de presupuesto también deben ser sometidos a aprobación del P.E. Esto es razonable, pues tales planes sectoriales deben encuadrarse en los globales de la Provincia.

El Directorio de CB/DPH está formado por 4 miembros, designados por el P.E., por 3 años, de los cuales uno debe ser abogado y los demás ingenieros. Debe reunirse semanalmente, y los directores son ejecutivos pues sus empleos son "full time". El Ministro de Obras Públicas de la Provincia, cuando lo desea, integra y preside el Directorio.

En general en CB/DPH está centralizada la autoridad provincial de aguas, pues por ejemplo, en las obras de uso múltiple es ella la que las maneja, y cuando son hidroeléctricas CB/EPEG se limita a operar las instalaciones generadoras pero no las obras hidráulicas. Incluso el suministro (público o privado) de agua potable, la navegación de los embalses, la instalación de quioscos en las riberas y la extracción de ripio y arena de los cauces, están bajo control de CB/DPH. Al crearse CB/IPAAC se restaron responsabilidades a CB/DPH, pues el primero fue inclusive autorizado a operar sistemas de riego, y es, además, el principal responsable del uso del agua en la tierra, esto es, de los aspectos agronómicos del uso de agua. Así los problemas de control de erosión y de conservación de suelos están a su cargo. También el uso piscícola del agua. El manejo de bosques protectores de las cuencas hidrográficas está en manos de CB/DPB.

Como se puede ver en los capítulos pertinentes, CB/DPH es responsable del uso doméstico y municipal. En esta materia concurre con la actividad de N/OSN. Pero los servicios provinciales son prestados por ella, por convenios con las municipalidades, pues a éstas atañe ese problema, según la Constitución cordobesa. Además controla los servicios prestados por particulares, que allí tienen bastante importancia.

En materia eléctrica CB/EPEC es la responsable de prestar los servicios y ejerce también la autoridad eléctrica, pero no la de aguas, sin interferir con CB/DPH.

11. La CP/DPH administra el Fondo Hidráulico integrado por la recaudación del canon de riego y de la contribución de mejoras, y por el 10 por ciento del producido de los impuestos inmobiliario territorial y sobre "actividades lucrativas" en toda la Provincia, especialmente afectados a ese fin. El 20 por ciento de su recaudación por canon de riego debe ser individualizado y afectado a una cuenta especial, utilizables únicamente en adquisición de maquinaria y equipo y construcción o ampliación de obras. Esta cuenta puede ser afectada en garantía de obligaciones que CB/DPH asuma para los mismos fines que determinan la formación de la cuenta.

CB/DPH está autorizada a prestar asistencia financiera a municipalidades y cooperativas de usuarios que deseen construir obras hidráulicas, consistente en la financiación irrembolsable del 50 por ciento del costo de éstas y, además en la preparación de los proyectos y construcción de las obras.

La ley acuerda genéricamente a CB/DPH la facultad de ocupar la vía pública y de expropiar bienes privados para el cumplimiento de sus fines, debiendo el P.E. individualizar por decreto los bienes a expropiar.

4. Provincia del Chubut

12. El art. 82 de la Constitución hace imperativa la creación de una agencia autárquica para la administración de las aguas incluso subterráneas y también que ella sea integrada por las autoridades de los canales. A las asociaciones de los usuarios, de éstos el art. 80 les garante también su autarquía, y el art. 84 que sus autoridades serán electas por los usuarios, pero hasta ahora ninguna funciona. La norma comentada da derecho electoral en relación a las autoridades de aguas no sólo a los propietarios de concesiones de aguas, sino a sus inquilinos y otros usuarios directos de las aguas. En esta provincia se riegan dos áreas bajo sistemas oficiales: unas 20 000 has. en el valle inferior del río homónimo, y unas 15 000 en Sarmiento, sobre uno de sus tributarios. Ambos sistemas fueron construidos por la Nación cuando ésta administraba todo Chubut como Territorio Nacional, y bajo el régimen de la ley N/6546. Al ser erigido Chubut en Provincia las aguas han pasado al dominio provincial, pero aun no se ha consumado la transferencia de dichos sistemas a la administración provincial, ya autorizada por la legislación federal bajo cuya égida continúan (N/AEE). La provincia no ha cumplido aun el mandato de su Constitución de organizar su propia autoridad hídrica. Fuera de esos riegos mediante obras públicas sólo existen pequeñas irrigaciones cordilleranas, hechas por obras construidas y manejadas por los propios usuarios.

La construcción de las obras hidráulicas "fundamentales" requiere autorización legislativa, según el art. 87 de la Constitución.

13. El P.E. provincial dictó el D. CHT/1816 (1958) por el que asumió la autoridad de aguas, y las funciones que el Código Rural para los Territorios Nacionales asignaba a la Inspección de Agricultura (del gobierno federal).

Dicho Código, cuyas normas se comentan en otro lugar, contiene unas pocas reglas relativas al uso de aguas, y las provincias ex-territorios Nacionales (incluso Chubut) le han mantenido vigente en sus jurisdicciones, interdicen su propia legislación en su reemplazo. Pero el ejercicio de la "Inspección de Agricultura" por el P.E. chubutense se limita, en la realidad, por el motivo antes explicado, a las áreas no administradas por N/AEE, esto es, prácticamente a nada.

14. La Ley CHT/256 creó la Dirección Energética provincial, pero aún no se produce en Chubut energía hidroeléctrica. La Ley CHT/123 aprobó el contrato del Gobierno provincial con N/AEE relativo a la transferencia a la Provincia de la presa Florentino Ameghino, de uso múltiple, aun no concluida.

15. El DL CHT/380 (1963) creó la Corporación de Fomento del Valle Inferior del Río Chubut (CHT/CORFO). Esta es una autoridad de desarrollo integrado de la mencionada subcuenca, a base, principalmente del uso de sus recursos hidráulicos. Lo reciente de su instalación, aun no completada, impide formar juicio sobre su marcha. Podría decirse que es una secuela de la creación por la provincia de Río Negro de una agencia similar (RN/IDEVI) y configura una plausible tendencia a la organización de este tipo de agencias, tan conveniente para programas regionales de desarrollo acelerado. Es una agencia de programación y ejecución, por tanto también autorizada para construir y administrar las obras hidráulicas y demás públicas (caminos, etc.) necesarias en su área de jurisdicción territorial. Esta fue delimitada por el D. CHT/381 (1963) e incluye la presa Florentino Ameghino y su lago, y hasta 50 km aguas arriba (zona de seguridad). Ejerce, también la autoridad de aguas en su área. Sus demás funciones son amplísimas y no se limitan a los recursos hidráulicos, sino a todos los demás recursos naturales, humanos y culturales del área. Para cuando se cree la autoridad provincial de aguas, la ley prevé que CHT/CORFO seguirá actuando en el área, como dirección autónoma del cauce inferior del río, autorizada por el art. 82 de la Constitución provincial. Como autoridad de aguas ejerce el poder concedente, y la policía sobre el uso, tanto de las públicas como de las privadas. Además debe construir y administrar las obras hidráulicas y promover la formación de consorcios de usuarios para la administración por éstos de los canales distribuidores. También puede imponer y recaudar los tributos vinculados a la construcción y explotación de las obras.

Le maneja un Directorio de 4 miembros, designados por el P.E. provincial con acuerdo legislativo, que duran 4 años y son inamovibles, salvo juicio político. El Directorio se renueva bienalmente por mitades. Los otros órganos de administración son la Comisión Asesora y el Gerente General.

La Comisión Asesora se integra por representantes de otras entidades públicas y privadas del área, incluso municipalidades, pero la ley defiere al Reglamento la forma de elegirlos. Duran 2 años y sus funciones son meramente consultivas y gratuitas, aun cuando pueden percibir un viático por asistencia a sesiones.

El Directorio tiene la dirección general de CORFO, y tiene también autoridad jurisdiccional administrativa en conflictos individuales, de modo que ejerce la justicia de aguas. Fija los cánones, tasas y tarifas por los servicios que preste CHT/CORFO, es decir, ejerce poder impositivo, salvo en materia de contribución de mejoras, en que sus funciones son de asesoramiento al P.E. provincial. Nombra y remueve al personal, y aprueba el Presupuesto anual que proyecta el Gerente. Al P.E. sólo eleva una memoria, balance y cuenta de ganancias y pérdidas, para su remisión a la Legislatura, y le solicita que ejerza el poder de expropiación, caso necesario. El Directorio decide también sobre las compras. CHT/CORFO está concebida para que actúe como una agencia "holding" para ~~promover~~ promover, incluso financieramente, la formación de empresas y cooperativas para cubrir sectores singulares de actividad, de los comprendidos en la amplia enumeración funcional de sus facultades. Puede contratar crédito interno e internacional y delegar parte de sus facultades en el Gerente.

El Gerente General es el ejecutor de las decisiones del Directorio, las que debe proyectar. Es el superintendente de las empresas que CHT/CORFO cree y desprenda de sí. Es designado y removido por el Directorio a propuesta del Presidente. Parecería mejor solución haber acentuado su inamovilidad, y también sus atribuciones, disminuyendo las del Directorio, más sujeto a las influencias políticas partidistas, por razón de su pluralidad y del origen de su nombramiento. Además la experiencia muestra menos ejecutividad en un órgano pluripersonal como es el Directorio.

El control del manejo patrimonial está a cargo de una Comisión Revisora de Cuentas (dos auditores), designada por el P.E. provincial, y se hace por procedimientos de auditoría similares a los de las empresas privadas, y no bajo

las leyes de contabilidad y obras públicas. Este régimen es plausible pues sustrae a CHT/CORFO del "red tape" propio del manejo de la hacienda pública, sin enervar el control gubernamental (incluso el final, por el Tribunal de Cuentas) CHT/CORFO se da sus propias normas de manejo patrimonial. Los empleados de CHT/CORFO en sus relaciones con ésta se rigen por la legislación privada y no por la de los empleados públicos.

Otra plausible previsión de la ley es la obligación de formular y mantener actualizado un plan quinquenal de actividades.

El patrimonio de CHT/CORFO se integra con:

- a) las obras hidráulicas que N/AEE debe transferir a la Provincia, según el convenio celebrado con ésta (dique Florentino Ameghino y sistema de riego y drenaje derivado);
- b) las tierras públicas provinciales existentes en su área de jurisdicción;
- c) el 3 por ciento de las rentas generales del Gobierno provincial;
- d) las partes de otros fondos sectoriales de desarrollo que le asigne el P.E.;
- e) los impuestos y tasas por prestación de servicios que le compete percibir, y las utilidades que den las empresas que forme o en que participe;
- f) recursos provenientes del crédito. La ley le autoriza a colocar hasta \$500 millones en títulos de deuda en otras agencias del gobierno provincial que tengan fondos disponibles.

CHT/CORFO está exenta de impuestos provinciales. No así las empresas de ella dependientes. La colonización de las tierras públicas debe hacerla bajo convenio con el Instituto Autárquico de Colonización creado por la Constitución provincial, y bajo las normas de la ley especial sobre esta materia.

16. Se nota en Chubut la ausencia de la autoridad de aguas que la Constitución dispone crear. Varias leyes relativas a obras o trabajos públicos son aludidas en los capítulos referentes a los respectivos usos, pero ninguna atribuye a una autoridad, de modo orgánico, la ejecución de esas tareas. Adviértase incluso que dependencias gubernamentales indirectamente vinculadas al manejo de aguas dependen de distintos ministerios (el Instituto de Colonización y la oficina de Bosques y Parques, del de Economía, y la Dirección Energética del de Asuntos Sociales y Obras Públicas). El Servicio Hidrogeológico creado por la Ley CHT/336 (1960) integra la Dirección de Minas.

5. Provincia de Jujuy

17. El Código de Aguas de 1950 creó una autoridad hídrica, convertida luego por la Ley JY/2459 (1958) en la "Dirección de Agua y Energía" (JY/DAE), por la adición de responsabilidades en materia eléctrica. Cabe señalar que en Jujuy no existen actualmente obras de riego bajo administración federal, de modo que las 76 000 has regadas son controladas por JY/DAE. En cambio las centrales hidroeléctricas que funcionan en dicha Provincia son operadas por N/AEE, y la JY/DAE sólo maneja centrales térmicas, de manera que la adición de responsabilidades en el campo eléctrico a la autoridad de aguas no parece que haya sido necesaria.

El Código de Aguas define a JY/DAE como agencia autárquica, aunque supedita el comienzo de tal situación (art. 294) al momento en que la Ley de Presupuesto así lo resuelva. Este momento no ha llegado aún, y la eficiencia de JY/DAE se resiente por la carencia de autarquía, sobre todo patrimonial, tema sobre el que se vuelve más adelante.

18. JY/DAE es gobernada por un Consejo designado por 4 años, por el P.E. provincial. Lo forman el Director General y los jefes de las divisiones Agua y Energía. Los 3 deben ser ingenieros. El jefe de la otra División que integra a JY/DAE, la División Administración, no forma parte del Consejo. Así, los miembros del Consejo en sus funciones ordinarias son dependientes del Director General, que lo preside, en tanto que dentro del Consejo son sus pares.

Las facultades del Consejo cubren todos los usos del agua superficial o subterránea. En cuanto a los aspectos agrícola-ganaderos y al estudio de las dotaciones, debe dar intervención a la Dirección de Fomento Rural. JY/DAE es a la vez autoridad ejecutiva (policial), y administrativa de aguas, tiene poder normativo o reglamentario de la Ley ("ius edicendi"), ejerce la justicia de aguas en instancia administrativa, y cumple también actividad empresaria, pues construye y opera obras hidráulicas o eléctricas y presta los servicios para los que aquellas sirven (suministro de agua potable, de riego, industrial y de electricidad). No es sin embargo autoridad eléctrica, si no en relación a los servicios que ella misma presta. El Consejo designa el personal de JY/DAE, pero en cambio debe someter a aprobación del P.E. provincial los planes de obras, su Presupuesto, y las concesiones de uso de aguas públicas que no puede otorgar por sí mismo.

El mandato legal de dividir la Provincia en zonas de características uniformes es muy sabio, pues ésta presenta ciertamente dos bien definidas y distintas, los problemas de cuyo manejo difieren considerablemente entre sí. Una es la de los valles del altiplano, donde prima el minifundio, y es árida; la otra es la región oriental, semitropical y húmeda, donde existen muy grandes explotaciones extensivas, principalmente de caña de azúcar. El aludido mandato legal incluye el de instalar al frente de cada zona a delegados con el título de Intendentes de Agua. Pero no ha sido hasta ahora cumplida esa norma de descentralización burocrática, que aumentaría la eficiencia de JY/DAE.

19. El patrimonio de JY/DAE está formado por los tributos y cánones por uso de aguas por las tarifas por la electricidad y el agua potable que provee, y por los recursos que le asigna anualmente la Ley de Presupuesto. Los dos primeros (cánones y tarifas) son recaudados por ella, setán especialmente afectados a su funcionamiento, y son administrados por su Consejo. Pero otras reglas del Código de Aguas, como las que mandan recuperar parte de las inversiones en obras hidráulicas a través de contribuciones de mejoras, no son cumplidas, o en todo caso, esos fondos no son administrados por JY/DAE. El importe de los cánones y tributos por uso de aguas es fijado por la Ley Impositiva, y ello retarda la actualización de sus montos. En el Presupuesto Provincial para 1963 el cálculo de ingresos por cánones de agua era de \$ 9.5 millones, en tanto que el presupuesto de funcionamiento de JY/DAE (excluidas obras hidráulicas) era de \$ 9,8 millones. Esta falta de independencia patrimonial es uno de los principales factores que le restan eficiencia.

20. Los consorcios de usuarios que la ley manda organizar no lo han sido, como ya se dijo. Sólo dos funcionan, de hecho y fuera de control por la JY/DAE. Los usuarios no participan tampoco en la dirección de JY/DAE, si bien es cierto que el Código de Aguas no lo prevé ni autoriza.

JY/DAE actúa bajo las normas ordinarias de las leyes de contabilidad y obras públicas, lo que le resta agilidad. Las obras hidráulicas, y las respectivas apropiaciones de fondos, deben ser autorizadas anualmente por la Legislatura, a través de las leyes aprobatorias de los planes de obras públicas.

6. Provincia de La Pampa

21. Esta provincia no tiene autoridad de aguas, ni ley que la organice, no obstante haber dictado el excelente Código de Aguas comentado en el capítulo 1, C.

En su Ministerio de Obras Públicas ha sido recientemente organizada una Dirección de Aguas, responsable principalmente de hacer trabajos de prospección y alumbramiento de agua subterráneas. El Decreto LP/363⁽¹⁹⁶³⁾ ~~de 1963~~ comentado en el capítulo relativo a éstas.

El agua potable es provista en la ciudad Capital (Santa Rosa) por N/OSN. En algunas ~~otras~~ ciudades hay servicios con grifos públicos, prestados por dependencias del Ministerio de Gobierno.

22. El Ente Provincial del Río Colorado (LP/ERC) merece un comentario especial. Fue organizado por DL.LP/21 (1962) para suceder a la Comisión Técnica (provincial) del Río Colorado, que había sido creada por DL.LP/511 (1960). Es una agencia autárquica, con personalidad pública y privada, responsable del desarrollo integrado de la región pampeana de la cuenca del río Colorado. Le compete programar, construir y manejar las obras hidráulicas pertinentes, y también las relativas a otros recursos naturales, humanos y culturales del área (como forestales, energéticos, agropecuarios, etc.), y está facultada para realizar en su área la colonización de las tierras públicas, y para promover con sus asistencia financiera o técnica la actividad industrial y comercial.

Le maneja un Directorio de 6 miembros, designados por el P.E. provincial, con acuerdo legislativo por 4 años, renovándose bienalmente por mitades. Dos directores representan a las asociaciones de profesionales (ingenieros, etc.) implicadas en el desarrollo de la región; uno al comercio e industria; uno a la actividad agropecuaria y otro a los regantes y colonos de la zona, cuando se constituyan en asociación. Dichos directores deben ser nombrados a propuesta en terna de las asociaciones representativas de los sectores enumerados, según lo reglamente el P.E. El Directorio debe reunirse al menos quincenalmente y su remuneración es fijada y es a cargo del Presupuesto de la Provincia. El Reglamento, Presupuesto anual y Plan de Trabajos deben ser sometidos a aprobación, el primero del P.E. y los demás de la Legislatura. El Directorio administra los fondos y nombra y remueve el personal (excepto el Gerente, que es nombrado por el P.E., a su propuesta). Puede promover y participar en cooperativas y empresas privadas. Propone al P.E. una terna para que éste designe el representante de La Pampa en la Comisión Técnica Interprovincial del Río Colorado (IP/COTIRC), de que se trata en otro lugar.

La autoridad ejecutiva es el Presidente, designado por el P.E. El Gerente General, que debe ser contratado por concurso, es su principal auxiliar técnico-administrativo, pero no tiene facultades ejecutivas propias, aunque pueden serle delegadas.

Un Consejo Asesor integrado por representantes ad honorem de: Universidad de La Pampa, Banco de La Pampa, municipios de la zona de influencia, organizaciones profesionales, comercio e industria, agro, cooperativas agrarias y eléctricas, gremios, colonos, e Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), tiene funciones meramente consultivas.

El patrimonio del Ente depende enteramente de las asignaciones del Presupuesto provincial. Puede usar del crédito nacional e internacional, y cobrar tasas y tarifas por sus servicios. Podrá también percibir contribuciones de mejoras que se colecten en su área de influencia, correspondientes a las obras que construya. Se rige por la ley de contabilidad y la de obras públicas, aun cuando el EL de creación autoriza a expedir normas especiales para él, lo que sería recomendable dada su característica de agencia de desarrollo regional acelerado.

Su sede está fuera del área de su jurisdicción territorial - lo que tampoco parece una buena solución - y la ley de creación tampoco fija bases para deslindar geográficamente dicha área. Adviértase que la ley no habla de la cuenca sino del río Colorado.

Sin duda este instrumento legal requerirá ser perfeccionado y ampliado cuando el Ente complete su organización y empiece a actuar con más intensidad.

7. Provincia de La Rioja

23. Su nuevo Código de Aguas (1963) regula ppolijamente la organización de su autoridad hídrica. Crea una entidad autárquica denominada "Administración Provincial del Agua"n(CM/IAPA), con las siguientes funciones:

- a) Estudio, prospección y evaluación de los recursos hídricos, obras, suelos, cultivos, pluviometría y meteorología, estadística y asesoramiento;
- b) Policía y control del uso de aguas;
- c) Reglamentación del aprovechamiento de las aguas;
- d) Realización de obras de interés general.

24. CM/APA es manejada por un Consejo General, integrado por dos representantes de su personal técnico designados por el Poder Ejecutivo, y por dos representantes de los usuarios. Lo preside el Administrador General del Agua, designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura.

25. Las Oficinas y funcionarios de la Administración General del Agua son:

- a) El Presidente, que dirige y administra el organismo, recaudando los fondos, inspecciona los consorcios y dirige las tareas de investigación, estadística y difusión que incumbe al mismo;
- b) El Secretario General, que tiene funciones de coordinación entre los distintos departamentos y el Consejo General;
- c) Los departamentos Legal, Contable, Técnico de Proyectos y Construcciones y Técnico de Explotación y Conservación;
- d) Los intendentes de cada una de las cuatro zonas en que la ley divide a ese efecto a la Provincia, cuyo cometido es ejercer funciones de jueces de Aguas, supervisar las obras construidas por los concesionarios y la tarea de los inspectores, vigilar el suministro de agua, llegar aforos estadísticos.

Cabe señalar la inconveniencia de incorporar a un cuerpo jurídico que debe gozar de permanencia y organicidad, normas de organización administrativa, que deben ser eminentemente variables.

26. El Código de 1963 insiste en el sistema de la antigua ley de aguas Ley LR/550 (1932) que reglamentó las Juntas de Delegados como organismos encargados de administrar los canales. Estas juntas nunca habían llegado a funcionar. Sólo la Junta de Regantes de la Capital creada por el D. LR/8988 (1943) funcionó poco tiempo.

27. El D. LR/11435 (1960) reglamentó la organización de consorcios de usuarios para construir o ampliar obras hidráulicas con fondos del presupuesto provincial, pero a cuyos usuarios les hacía contribuir también, poniendo además a su cargo la contratación y vigilancia de la construcción de las obras. Este sistema también funcionó poco tiempo.

Todo esto se debe al hábito arraigado en los usuarios de que el Gobierno haga los trabajos que a ellos correspondería hacer, y a que les cobre un canon que no alcanza a cubrir los costos. Muchos grupos de usuarios lograron que diversas leyes pusieran a sus sistemas de riego bajo administración provincial,

lo que significó que los gastos de administración y conservación fueron asumidos por el Gobierno. Leyes LR/1218 (1949); 1277; 1316; 1350 y 1353 (1949); 1454 y 1462 (1950) y 1629.

28. Cada canal secundario y sus respectivos desagües deben ser - según el Código - administrados por un consorcio, que tendrá a su cargo la percepción e inversión de las prorratas - que son las cuotas partes destinadas a cubrir los gastos particulares de los acueductos que lo benefician.

Los consorcios son creados por la ley, es decir no para menester de otro acto formal y los integran todos los beneficiarios que se abastecen de un mismo canal. Los maneja una Junta de Delegados. Los inspectores operan ejecutivamente los canales en representación de la Junta de Delegados.

Los canales matrices y diques deben ser administrados por una Junta formada por inspectores de los canales de ellos derivados, bajo la presidencia del ~~del~~ independiente de Aguas. Los inspectores deben representar a cada una de las zonas (superiores, media e inferior) en que debe ser dividida el área servida por los canales y el dique. Los designa el Consejo General.

29. El Servicio de Hidrología de la Dirección de Minas, es responsable del manejo de las aguas subterráneas, y su acción no está coordinada con la de CM/APA. El Departamento de Agropecuaria es responsable del uso pecuario.

8. Provincia de Mendoza

30. La Constitución Provincial, de 1916, dedica un capítulo al régimen de las aguas en el que fija las bases de la organización de su autoridad hídrica. Las normas de la misma Constitución que reglan derechos individuales ya han sido examinadas en el capítulo 1. Las que conciernen a la autoridad de aguas se reseñan a continuación. El manejo de las aguas fue en Mendoza de competencia de un Juez de Aguas, hasta que la primera Constitución mendocina (1855) lo atribuyó a las municipalidades. Tal régimen, manifiestamente inconveniente, subsistió hasta que la Constitución de 1894 adoptó el sistema actual de atribuir la administración hídrica a una autoridad provincial central. A partir de 1905 se dio autonomía a ésta. Ofrece interés detenerse en la exposición del sistema mendocino, tanto porque preside el gobierno de la mayor área regada de Argentina (413 000 has) como porque tiene fama de eficiente, lo que ha determinado a los gobiernos de otras provincias a intentar imitarlo. Eso no ha sido logrado, quizá por no haber sido debidamente entendidas las bases y características sustanciales del modelo. Las reglas constitucionales sobre administración hídrica son en Mendoza las siguientes:

- a) una agencia administrativa autónoma, el Departamento General de Irrigación (MZ/DGI), está "exclusivamente" a cargo de todos los asuntos relativos a irrigación, excepto aquellos en que por controvertirse únicamente intereses privados, competen a los jueces ordinarios. Lamentablemente la autoridad creada por la Constitución mendocina es de irrigación y no de aguas, y esto ha permitido que MZ/DGI no aborde ni se preocupe de todos los múltiples usos y efectos de las aguas, Y también que el Poder Ejecutivo Provincial haya cedido muchas veces a la tentación de sustraer problemas hídricos de su manejo, sin ninguna ventaja de orden técnico. MZ/DGI es gobernado por un "Superintendente General de Irrigación" y un Consejo de 5 miembros, designados por el P.E. provincial con acuerdo del Senado local. Sin que ninguna regla legal lo imponga se ha sentado la práctica de designar uno de entre los regentes de cada una de las 5 "Subdelegaciones" en que a efectos de la administración hídrica se divide Mendoza, costumbre que es plausible y debería institucionalizar la ley. Los consejeros son nombrados por 5 años, en tanto que el Gobernador que lo hace sólo dura 3, y cada año debe renovarse un Consejero. Son inamovibles, salvo por el Jury de Enjuiciamiento de Magistrados. Esto les ha considerable independencia política partidista, y ha contribuido a la eficiencia del organismo. Arts. 188-191. El MZ/DGI debe sancionar anualmente su propio Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos, lo que significa que tiene poder impositivo, pues fija por sí mismo el importe de los impuestos que recauda para cumplir sus responsabilidades (art. 196). En virtud de esa norma su autarquía patrimonial es completa, pues tampoco necesita autorización legislativa para invertir sus rentas. Esto le da agilidad y eficiencia.
- b) La Constitución autoriza (art. 196) a dar "dirección autónoma" a cada uno de los ríos de la Provincia (que son: Mendoza, Tunuyán, Diamante, Atuel, Desaguadero y Grande-Barrancas-Colorado), "sin perjuicio de su dependencia del MZ/DGI". Esta facultad no ha sido ejercitada por el legislador, y al frente de la administración de cada río hay solamente un "Subdelegado", jerárquicamente dependiente del Superintendente General. Por un reglamento administrativo R.MZ/53 (1959) del Superintendente General de Irrigación, se creó una "Junta Honoraria de Regantes" para cada Subdelegación a las que se alude más abajo.

- c) . Las obras "fundamentales" (diques distribuidores y de embalse, grandes canales, etc.) "que proyecte el P.E." provincial deben ser autorizadas por ley. Parece un error de los constituyentes haber sustraído al MZ/DGI la responsabilidad exclusiva de preparar proyectos, para asignarla también al P.E. (gobierno provincial), pues de ese modo la responsabilidad de la programación resulta compartida y en definitiva, ésta no se realiza. Las obras que proyecte MZ/DGI deben ser también autorizadas por ley, si son de la magnitud de las antes referidas. Las de menor entidad no necesitan aprobación legislativa. Art. 192. La expansión de las áreas regadas, o la creación de nuevas, (se entiende de las que lo estaban en 1916) también ha menester autorización legislativa, y ésta debe ser prestada por el voto de la mitad más uno de los miembros que componen cada Cámara (Mendoza tiene Senado y Cámara de Diputados). La norma que así lo establece (art. 195) sólo parecería autorizar tales extensiones "una vez practicado el aforo de los ríos y arroyos" o "cada vez que se construyan obras de embalse que permitan un mayor aprovechamiento del agua", y requiere además un estudio previo e informe a la Legislatura por MZ/DGI.
- d) Los usuarios de aguas tienen derecho - garantido por la Constitución - a elegir las autoridades que manejan sus canales, hijuelas y desagües, y a administrar por sí mismos las rentas recaudadas para el mantenimiento y administración de éstos (art. 187). Esta norma se cumple efectivamente, y en Mendoza había en 1960, 554 entidades administrativas autárquicas, llamadas "canales". Este es factor fundamental de la eficiencia del sistema de administración hídrica mendocina. La autoridad provincial (MZ/DGI) puede ejercer - y lo hace - un control del manejo de su patrimonio por los canales.
31. La Ley MZ/322 (1905) reglamentó las normas reseñadas, organizando el Departamento General de Irrigación conforme al siguiente esquema:
32. a) TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE IRRIGACION. Contra lo que su denominación indica, no tiene funciones jurisdiccionales. En cambio sí las tiene el Consejo de que trata más abajo. Aquél está integrado por los mismos 5 miembros que componen el aludido Consejo, y además por el Superintendente General de Irrigación. Son sus funciones: a) nombrar y remover todos los empleados de MZ/DGI; b) sancionar el Presupuesto anual del MZ/DGI y fijar el monto de los

impuestos que éste recauda ("cuotas de sostenimiento"); c) aprobar o desaprobar las elecciones de autoridades de canales, de que se trata más abajo y designar "interventores" de éstos, caso necesario; d) aprobar o rechazar los presupuestos anuales de dichos canales. Este control es de legitimidad y no de oportunidad o conveniencia; e) expide reglamentos para el régimen interno del MZ/DGI, pero que también crean derechos y obligaciones a los usuarios de aguas, esto es, ejerce un ius edicendi, admitiéndose, de hecho, que la facultad reglamentaria de la Ley de Aguas no atañe al Gobierno Provincial sino a este "Tribunal". Ley MZ/322 (1905) art. 26.

33. b) CONSEJO DE APELACIONES DE IRRIGACION. Organizado por la misma ley recién citada, le integran 5 consejeros designados como se explicó más arriba. Son reelegibles. Es el tribunal de superior instancia administrativa en asuntos de distribución y uso de aguas públicas y ante él son recurribles las decisiones del Superintendente General. De sus fallos sólo hay recurso contencioso administrativo, ejercitable ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, que allí ejerce la última y única instancia judicial en esa materia. No obstante que la Ley MZ/322 (1905) dice que el procedimiento ante él debe ser "breve y sumario", en la práctica dista mucho de serlo. La justicia de aguas es en Mendoza extremadamente engorrosa y lenta y por tanto ineficiente: si el problema es administrativo, esto es, si concierne a aspectos de interés público del uso de aguas públicas, pueden tramitarse 4 instancias administrativas y una judicial: 1a.: el Inspector del Canal; 2a.: el Subdelegado del río; 3a., el Superintendente General; 4a.: el Consejo de Apelaciones; y 5a.: (judicial) la S. Corte. Las cuestiones de hecho, por hurto de aguas, no son en la práctica llevadas a decisión del Consejo porque las penas que puede imponer son ahora tan insignificantes (\$ 100, según el art. 102 de la Ley de Aguas), que no justifican el esfuerzo ni ejercen efecto alguno. Si ese mismo tipo de cuestiones es llevado a la justicia penal, salvo que se haya sorprendido in fraganti al ladrón - lo que es prácticamente imposible - éste es siempre absuelto, aunque se pruebe que el agua se robaba y usaba en beneficio de un determinado fundo. Por ello, al Consejo sólo van intrincadas cuestiones de derecho, y por la razón apuntada sólo llegan las graves y complicadas. Como sus miembros no son abogados, deben acudir a un asesor, y todo esto dilata aún más la solución final. Las cuestiones en que

sólo están envueltos intereses privados o aguas privadas atañen a los jueces civiles ordinarios, que son tan lentos como la justicia administrativa. Dificilmente el trámite completo de un asunto concluye en Mendoza en menos de 3 años. Cuando se trata de aguas, indispensables en esa región para mantener la vida vegetal, la demora, aunque se gane el pleito, equivale a perderlo. Quizá, para las cuestiones de hecho, valiera usar el ejemplo del Tribunal de Aguas de la Vega de Valencia, España, cuya fama deriva de que desde hace 1004 años administra justicia sin exceder nunca el plazo de una semana, desde que el hecho doloso es cometido hasta que es efectivamente sancionado.

34. c) SUPERINTENDENTE GENERAL DE IRRIGACION. Es el máximo ejecutivo y técnico del MZ/DGI responsable del manejo de los cauces naturales. Es también juez de aguas, pues entiende en apelación de las decisiones de los Subdelegados. Todas las solicitudes de concesión de agua pública deben tramitar originariamente ante él, aunque la decisión final incumba a la Legislatura. Administra los fondos del MZ/DGI rindiendo cuenta al "Tribunal" Administrativo ya aludido. Conoce también originariamente de las quejas contra los funcionarios de inferior jerarquía de que se trata luego. Decreta la distribución del agua "a turno", entre los canales artificiales, en la época de estiaje. Este funcionario actúa con verdadera independencia respecto del P.E. provincial, del cual, sin embargo, emana su nombramiento y no está sujeto a responsabilidades políticas, como los ministros. No puede, como éstos, concurrir a las reuniones de las cámaras legislativas, salvo por invitación. Tampoco integra el gabinete ministerial provincial, pero su rango es equivalente al de los ministros.

35. d) SUBDELEGADOS Y COMPARTIDORES. Los Subdelegados son funcionarios jerárquicamente dependientes del Superintendente, que tiene a su cargo cada uno la administración de un río. Sin que la ley lo exija siempre se nombran ingenieros en estos empleos. Hay 5: uno para cada uno de los ríos Mendoza, Diamante y Atuel y dos para el Río Tunuyán, que está dividido en dos subcuencas (inferior y superior) porque tiene ~~dos~~ diques distribuidores. Tienen a su cargo la inmediata administración del respectivo río, y la distribución del agua entre los canales de él derivados.

36. Esta la hacen, materialmente, los "compartidores", empleados subalternos dependientes de los subdelegados, quienes entregan las dotaciones a los inspectores de canales. También son los responsables de conservar las obras hidráulicas existentes sobre los ríos (no así en los canales, como se verá luego). Los subdelegados son jueces de agua de 2a. instancia administrativa, pues las decisiones de los inspectores de canales son recurribles ante ellos. Hay pues en Mendoza, en esta materia, una auténtica descentralización burocrática territorial, a base de cuencas y no de subdivisiones políticas del territorio, única razonable - la primera - cuando se trata de manejar recursos hídricos.

37. e) JUNTAS HONORARIAS DE REGANTES. La ya citada Resolución N°53 (1959) del Superintendente General de Irrigación, creó estas juntas, una para cada Subdelegación. Las integran el respectivo Subdelegado, el miembro del Consejo de Irrigación vinculado al área y 3 regantes, electos anualmente por los inspectores de los canales de la jurisdicción. A tal efecto cada una de éstas es dividida en 3 zonas, procurándose que todas tengan representante en las Juntas. Son funciones de éstas: a) controlar la distribución del agua entre los canales; b) actuar como órgano de conciliación, sin que sus acuerdos tengan imperio, en los conflictos interzonales u otros que deba resolver el Subdelegado; c) supervisar la ejecución de obras hidráulicas y sugerir la construcción de las que estimen recomendables. Sesionan mensualmente. La Resolución comentada ~~ha~~ llenado un vacío de la ley y ha marcado el principio de cumplimiento de un mandato constitucional. La corta experiencia muestra ya las ventajas de hacer participar a los usuarios también en la administración de los ríos y no sólo de los canales.

38. f) AUTORIDADES DE "CANALES". Cada canal, esto es, cada acueducto artificial derivado de los cauces naturales o de sus obras de distribución, es administrado por sus usuarios. Como se dijo más arriba, en Mendoza había en 1960 554 administraciones de esta clase. La ley mendocina no ha definido la naturaleza jurídica de estas entidades, limitándose a reglar las atribuciones de sus autoridades y la forma de su elección. Leyes de otras partes, como la chilena, lo hacen, caracterizándolas como "asociaciones de canalistas". Y también otros códigos provinciales argentinos (Jujuy, Salta, etc.), que les denominan "consorcios de usuarios". Hay que advertir que en Mendoza hay unos

pocos canales artificiales denominados "matrices", que por su envergadura han sido asimilados a los cauces naturales y son administrados directamente por MZ/DGI. Todos los demás canales artificiales se manejan en la forma que se está explicando. Hay canales secundarios y terciarios, que son llamados "ramas" e "hijuelas", y que tienen también cada uno su administración autárquica. Lo propio ocurre con los canales que no sirven para riego sino para drenaje, o que cumplen a la vez, sucesivamente, ambos fines. Cada uno de esos acueductos es administrado por un Inspector, electo cada dos años por los usuarios inscritos en el padrón del respectivo cauce. Si el cauce riega más de 300 has. se elige también, en cada canal, una Junta compuesta de 3 delegados, que vienen a constituir el cuerpo deliberativo.

39. Son atribuciones de los delegados, esto es, de la Junta: a) fijar el monto de la "prorrata" anual que deben pagar los usuarios; b) fijar el Presupuesto anual del canal; c) autorizar y presupuestar las obras que hayan de hacerse en el mismo; d) examinar y aprobar o no la cuenta de administración del Inspector; e) acusar al Inspector ante el Superintendente, caso de comprobar irregularidades en la administración; f) "contratar la subasta y provisión del agua, la que deberá efectuarse por licitación pública, o por contrato particular si no se presentaren licitadores o si éste fuera más ventajoso" (Ley de Aguas, art. 226, inciso final).

40. Los inspectores son jueces de agua de primera instancia y deben decidir los conflictos que se suscitan entre los usuarios de su canal a causa de la distribución de las aguas. Además administran el canal y vigilan la distribución del agua, hecha bajo sus órdenes por empleados llamados tomeros. Con los fondos que administran los inspectores se pagan los sueldos de los tomeros, los trabajos anuales de limpieza y conservación de las obras de toma y de los acueductos, y a veces, pequeñas obras de mejoramiento (impermeabilización, etc.) que la Junta puede decidir realizar.

41. La elección de inspectores y delegados está reglada por una ley especial, Ley Z/1676 (1947), modificada por la L.MZ/2012 y por la L.MZ/2280. Las elecciones son presididas por los inspectores salientes y controladas por el Tribunal Administrativo, que las juzga y aprueba en definitiva. Las autoridades de canales duran 2 años y son reelegibles, pero sólo si reúnen 2/3 de votos. Si no los obtienen la elección es anulada y realizada de nuevo. Para

ser elector y elegido hay que ser titular de una concesión en el canal de que se trate. El derecho a voto está sujeto a la siguiente escala:

2 000 m ² a 2 has	1 voto	15 a 20 has	7 votos
2 a 5 has	2 votos	20 a 30 has	8 "
5 a 10 has	4 "	30 a 50 has	9 "
10 a 15 has	6 "	más de 50 has	50 "

Diez es el tope máximo de votos. El voto es obligatorio, so pena de multa. Se puede otorgar poder para votar, pero sólo al administrador, inquilino, mediero o "contratista", debiendo acreditarse esta calidad.

42. Rige en esta materia el "recall", pues si, en cualquier tiempo, usuarios representando 2/3 de los votos piden al Tribunal Administrativo por escrito, por causas justificadas, la remoción de las autoridades de un canal, el Tribunal debe acordarla y designar a los candidatos propuestos por los solicitantes. El Tribunal puede "intervenir" un canal, mediando causa justificada, esto es desplazar sus autoridades electas y designar otras. También puede multar a los inspectores remisos en el cumplimiento de sus deberes.

43. Adviértase que existe en Mendoza una descentralización administrativa de doble grado, pues el MZ/DGI es autónomo respecto del Gobierno provincial y los "canales" son autárquicos respecto del MZ/DGI, pues no dependen de él, salvo las facultades de control apuntadas. Estas se extienden principalmente al aspecto patrimonial de la gestión: el Tribunal Administrativo expide normas formales sobre la manera de redactar los Presupuestos anuales de los canales, impone ciertas limitaciones a los estipendios y reglas de manejo del patrimonio. Si los proyectos de presupuesto no se ajustan a tales normas el Tribunal puede desaprobarnos y poner otros en vigencia. Pero el Tribunal no puede revisar decisiones de las autoridades de canales bajo los aspectos de oportunidad o conveniencia, sino sólo de legitimidad. El otro vínculo de dependencia es en materia jurisdiccional, pues como se dijo, las decisiones de los inspectores como jueces de aguas son recurribles ante los Subdelegados.

44. El personal, permanente o no de los canales es designado por la Junta de Delegados a propuesta de los inspectores. La Ley MZ/2111 (1952) dispuso que los empleados permanentes de las inspecciones de canales (tomeros y otros) debían gozar de los mismos beneficios sociales que los empleados públicos (jubilación, salario familiar, etc.) sin que por ello sean empleados públicos.

45. El sistema de la "subasta" del canal, que la ley autoriza a sus autoridades a realizar, merece un comentario especial: desde la época colonial, y hasta la segunda mitad del siglo XIX, se "subastaban" anualmente el río Mendoza y algunos canales. Esto es, se ofrecía y adjudicaba en remate público un contrato de duración anual por el cual su adjudicatario se obligaba a hacer de su cuenta todos los gastos de reparación y conservación del canal y los necesarios para distribuir el agua (sueldos de tomeros, etc.) y además a pagar una suma al Gobierno. Obtenía en cambio el derecho a recaudar los impuestos de los usuarios del canal. La diferencia entre la cobranza y los gastos era la utilidad del "subastador". Este era, en el fondo, un contrato de concesión de obra pública.* Esta práctica cayó en desuso a principios de este siglo. Sin embargo, la cobranza de impuestos atrasados era dada por el Departamento General de Irrigación de Mendoza por contratos a particulares, hasta hace menos de 30 años. Quizá hoy podría ser útil retornar al empleo de un aspecto del régimen de la "subasta": la limpieza y conservación de los canales donde ello sea técnicamente posible podría ser contratado con empresas especializadas, como ocurre en los Estados Unidos cuyas empresas quizá - proveyéndose a base de tales contratos de equipos mecanizados especiales - podrían hacer esos trabajos más baratos que lo que a las actuales inspecciones les cuesta hacerlos por administración o mediante el trabajo manual, no mecanizado, de los propios usuarios.

46. Los empleos de inspector y delegados son ad honorem. La ley así lo dispuso para prevenir abusos que en el pasado se cometieron por algunos, que se fijaron emolumentos exorbitantes, con lo que el empleo de inspector pasó a ser una canongía de interés político. Sin embargo la ley autoriza al Tribunal Administrativo a consentir la fijación de sueldos a inspectores cuando lo complejo de la tarea a su cargo les exige distraer una parte desproporcionada de su tiempo personal.

47. En su conjunto el sistema que se acaba de describir es de notoria eficiencia. La administración hídrica mendocina, a través de todo el complejo régimen descrito es mucho más barata, a igualdad o superioridad de eficiencia, que la que una agencia federal (N/AEE) presta en lugares similares. Esto se debe a la participación personal de los usuarios en la administración de los canales distribuidores y de drenaje, la que a menudo llega, como se describió en el capítulo 1, hasta el punto de que los usuarios, en vez de pagar la

* V. Guillermo J. Cano, Bosquejo del derecho mendocino intermedio de aguas (Bs. As., 1942) edic. Fac. Derecho, Buenos Aires.

"prorrata", hacen ellos mismos los trabajos y proveen en especie los materiales. En todo caso, su control directo y constante, a través de los delegados, que gestionan la administración del canal como negocio propio, es el que permite lograr tales resultados. Además ese tipo de administración es gratis, en cuanto a los gastos de dirección.

Este sistema marca un contraste con otras provincias donde los usuarios se han acostumbrado a que el gobierno haga todos los trabajos y preste todos los servicios, sin interesarse por ellos ni tomar ingerencia en su control. La inesquivable burocracia es la que los encarece, en tales circunstancias. Además del hecho de que las escalas de salarios del personal obrero, en los sistemas de riego administrados por la Nación en provincias, son fijadas por convenios laborales uniformes para todo el país, discutidos en la Capital Federal, lo que carga innecesariamente los costos en aquellas provincias donde el costo de vida es considerablemente más bajo que en la Capital Federal.

48. El organograma anexo (Gráfico 2) muestra la organización interna de MZ/DGI y demás autoridades hídricas mendocinas. En él se ha hecho notar que en tanto el nombramiento del Superintendente, Tribunal y Consejo emanan del Poder Ejecutivo provincial, los de las autoridades de canales provienen directamente de sus usuarios. El personal inferior de los canales es designado por sus propias autoridades y el del MZ/DGI por el Tribunal, sin ingerencia del gobierno provincial en ninguno de ambos casos. El organograma enumera las distintas oficinas técnicas y administrativas que forman la Superintendencia.

49. Otro factor del éxito del régimen mendocino lo constituye el hecho de que la jurisdicción territorial de los distintos órganos está fijada a base de cuencas hidrográficas o de sistemas de obras hidráulicas, y no de las subdivisiones políticas del territorio (municipios, departamentos) como ocurre en otras provincias. Pues éstas no coinciden con aquéllas ni con los problemas de su manejo.

50. MZ/DGI tiene montada una oficina de ingeniería, que proyecta las grandes obras y que debe ejecutarlas cuando recibe autorización legislativa y apropiación de fondos. Además proyecta y construye las llamadas obras menores. Ver al respecto Cap. 2, F. Tiene una oficina de agronomía que estudia las técnicas de uso de agua en la tierra, pero que no cumple tareas de extensión agrícolas.



51. La ley de Aguas (art. 201) ya en 1884 consagró un principio conservacionista y de "watershed management", cuando dispuso que MZ/DGI "estudiará aquellas partes de las cuencas y laderas de los ríos y arroyos que convenga poblar o mantener forestalmente poblada, en interés del buen régimen de las aguas, lo mismo que las que convenga despoblar". Recién, casi 80 años después * la Superintendencia vuelve a ocuparse del asunto, presionada por los daños causados por aluviones. Un vacío de la legislación, que omitió asignar fondos para ocuparse del asunto, consintió que tales daños se produzcan. El hecho de que agencias nacionales se ocuparan en el interín de construir - pero no de conservar - algunas obras defensivas o de control determinó que las agencias provinciales se despreocuparan del asunto. La Ley MZ/2797 (1961) recién lo puso concretamente a cargo del MZ/DGI, creando como una dependencia suya la Dirección de Defensa contra Aluviones. El problema es más vasto que lo que indica esa denominación: es el de forestar cuencas y construir obras de control y no sólo de defensa. Y es de prohibir usos de la tierra o la flora (cría de cabras y tala del monte pedemontano) que van algo más allá de las actuales responsabilidades de una autoridad únicamente hídrica.

52. No obstante, los elogios que se han hecho del MZ/DGI rigen sólo para un aspecto de la administración hídrica: el que concierne al uso en riego y al manejo de desagües.

Pero la administración de aguas no es en Mendoza, de ninguna manera, integrada ni coordinada en relación a los demás usos y problemas hidráulicos ni a los recursos naturales conexos. Así, lo concerniente a aguas subterráneas es compartido por MZ/DGI con MZ/DMG la Dirección Provincial de Minas y Geología, sin que hayan nexos regulares entr ambas agencias. Lo relativo a provisión de agua potable, allí donde los servicios no son prestados por N/OSN o por municipalidades (casos de Maipú y Luján), atañe a la Dirección Provincial de Energía, que no está coordinada con MZ/DGI. Este tampoco lo está con N/OSN, na obstante que a veces comparte con aquél el uso de los mismos ríos.

* Departamento General de Irrigación de Mendoza. Memoria 1958-60 (Mendoza, 1960) págs. 182 y 282.

El control de las aguas meteóricas y de sus efectos nocivos incumbe al MZ/IFA, no obstante que todas las aguas en sus diferentes estados integran y cumplen un ciclo, lo que determina la influencia de unos estados sobre otros (meteóricas - superficiales - subterráneas).

Los recursos hidroeléctricos son manejados por N/AEE y por MZ/DPE. N/AEE mantiene buenas relaciones operativas de trabajo con MZ/DGI, pues en el único dique de embalse de uso múltiple que allí funciona (Nihuil), y en las centrales a filo de agua (Cacheuta, Alvarez Condarco, Gral. San Martín) que N/AEE opera en ríos y canales mendocinos, N/AEE respeta a MZ/DGI como autoridad de manejo, control y policía hídrica. Sin embargo, de tanto en tanto surgen problemas de manejo, no obstante los convenios vigentes.

En la programación del desarrollo hidráulico y de futuras obras la desconexión es total. Hay usos no cubiertos ni contemplados por ninguna agencia, como el industrial. N/AEE proyecta grandes obras hidroeléctricas y múltiples sobre los ríos mendocinos sin consulta ni anuencia de MZ/DGI. Lo mismo ocurre con N/OSN. El uso piscícola atañe al MZ/IPA: es que, como se dijo antes, la autoridad hídrica mendocina es de riego y no de aguas. Y debería serlo de esto último.

53. Es preciso recordar también que salvo la cuenca cerrada de la Laguna Llanquanelo (que incluye el pequeño río Malargue) todos los ríos mendocinos son interprovinciales o tributarios de interprovinciales. En el capítulo dedicado a éstos se vuelve sobre el particular. La Ley MZ/389 (1907) dispuso realizar obras en el río Desaguadero, pero éstas nunca fueron construidas ni proyectadas. Este río es limítrofe con la Provincia de San Luis.

54. Quizá ha influido en que el MZ/DGI sólo se ocupe del riego y drenaje el sistema financiero bajo el que se desenvuelve: su Presupuesto ordinario íntegro es pagado por los usuarios, sin aportes del Gobierno provincial. Por ello las obras hidráulicas que no interesan directa o exclusivamente a éstos - como es el caso de las de control de inundaciones, o de forestación de cuencas - no han sido abordadas por MZ/DGI (ni, agreguemos, por nadie). De tanto en tanto el Gobierno provincial ha votado fondos para estudiar, proyectar y construir grandes obras hidráulicas. A veces las encomendó al MZ/DGI y otras no, lo que no parece haya sido justificable, pues la formación y mantención de un personal técnico estable por éste último, da a éste una experiencia y una

visión de la totalidad del problema, que se pierden sustrayendo esos trabajos a su actividad. Así fue como los sistemas de desagües primero, y la remodelación de diques distribuidores después, fueron encargados a agencias distintas al MZ/DGI para, finalmente, concluir asignando tales tareas a éste. Es verdad que para tales propósitos se usaron fondos que provenían del Tesoro provincial y no del de MZ/DGI (formado exclusivamente por contribuciones de los usuarios). Pero lo mismo pudo encargarse el uso y manejo de tales fondos a MZ/DGI. Recién en 1941, al sancionarse la primera ley que creó un Fondo Permanente para Obras Menores (Ley MZ/1420), comenzaron aportaciones regulares del Tesoro provincial a trabajos a cargo de MZ/DGI. Principio que parece de toda equidad, pues si bien los regantes y otros usuarios son los beneficiarios directos de las obras hidráulicas, no es menos exacto que - particularmente en Mendoza - existe una vasta gama de beneficiarios indirectos, cuya contribución por vía impositiva es perfectamente justificable. Hay actividades, como las relativas a la prospección y control del uso de aguas subterráneas, o los proyectos de nuevas grandes obras de regulación, en que es difícil identificar los gastos que demandan con los beneficiarios, pues más bien se refieren a usuarios futuros. Ellas justificarían una contribución regular del Tesoro provincial, - es decir a cargo de los beneficiarios indirectos - para ser manejada por el MZ/DGI, que habilitara a éste para cubrir los demás usos y problemas ajenos al riego y drenajes, pero que le permitieran cumplir el manejo integral y coordinado de todos los recursos hídricos en sus diferentes estados físicos, sus distintos y múltiples usos y problemas atinentes a su administración, incluso el del manejo de otros recursos naturales inmediatamente conexos con los hídricos. La Ley MZ/2797 (1961) que pone a cargo del Tesoro Provincial los gastos de funcionamiento de la Dirección de Defensa contra Aluviones, que crea dentro y como dependencia jerárquica de MZ/DGI llena parcialmente el vacío que se acaba de señalar, pero sería deseable que otros fondos fueran asignados para que MZ/DGI pudiera cumplir los otros objetivos mencionados.

9. Provincia de Neuquén

55. El DL.NQ/0870 (1962) reglamentado por el D.NQ/0108 (1962) creó la Dirección de Agua y Energía Eléctrica de Neuquén (NQ/AEEN) agencia que actúa bajo dependencia jerárquica del Ministerio de Asuntos Agrarios, manejada por un Director General, ingeniero. El Decreto Reglamentario arregla minuciosamente el funcionamiento de cada una de sus oficinas. Es de su responsabilidad el control y la policía de las aguas superficiales y subterráneas, para todos los usos y efectos nocivos, y de la producción de electricidad (incluso térmica). Cumple también actividades empresarias, pues posee y opera un equipo perforador para alumbrar aguas subterráneas, construye obras hidráulicas y produce y distribuye energía térmica. En materia de riego controla sólo el 4.7 por ciento del área regada en la Provincia. Se dice "controla" pues las aguas no administradas por N/AEE lo son por los usuarios o los municipios. A la fecha del presente estudio sólo había transcurrido poco más de un año desde su creación. No obstante, el siguiente cuadro da idea de la actividad cumplida en materia de estudios y proyectos, y del importante papel que ~~le~~ está reservado en el futuro, ya que los estudios y proyectos en curso cubren un área regable de 92 830 has, 7.5 veces mayor que la actualmente manejada en la misma Provincia por N/AEE, cuya cifra excluye los usos que podrían derivar de la gran obra hidráulica interprovincial en proyecto (Complejo Chocón-Cerros Colorados). Adviértase que buena parte de los proyectos son de uso múltiple.

56. La L.NQ/106 (1959) dispuso la realización de estudios de obras de riego; y la L.NQ/48 (1958) la de obras de abastecimiento de agua potable a Zapala; la L.NQ.104 (1959) estudios de igual índole para Aluminé. Por la L.NQ/133 (1960) y 146 (1960) se aprobó un convenio referente a un préstamo de \$20 millones, con N/AEE, para la construcción por ésta de obras hidráulicas en el valle inferior del Limay, y se dispuso la creación del Fondo Provincial de Energía. La L.NQ/6 (1958) ordenó la adquisición de un equipo perforador de agua subterránea, operado por NQ/AEEN.

En la ley de Presupuesto para 1963 tenía asignados fondos para estudiar, proyectar o construir obras de agua corriente por \$14.3 millones y de riego por \$8.4 millones, aunque su personal administrativo y técnico se limita a 10 funcionarios.

NEUQUEN: OBRAS HIDRAULICAS EN ESTUDIO POR LA AUTORIDAD HIDRICA PROVINCIAL
Y BENEFICIOS PROYECTADOS (EXCLUIDOS LOS DERIVADOS
DEL PROYECTO CHOCÓN-CERROS COLORADOS)

Lugar del proyecto	Río a usar	Usos				Superficie a beneficiar (hectáreas) ^{b/}	Requisito embalse	Con estudios o antes proyectos
		Agua potable	Riego ^{a/}	Mine-ro	Hidro-eléctricos (HP)			
Valle inferior Limay	Limay		N+M			4 500		X
Andacollo	Huingango	X	N	X				X
Centenario	Neuquén	X						X
Chacay Melén			N			500		
Ruta Ranquil	Colorado		N					X
Ghos Malal	Neuquén	X	N+M			1 500	X	X
Arroyo Blanco	Arroyo Blanco		N				X	
Tucao-Malal	Curri Leuvú		N			6 000	X	
Huitrón	Neuquén		N			3 000		
Taquimilán	Taquimilán		N	X	X	2 500	X	
Pampa del Salado	Salado		N			400		
Bajada del Agrio	Agrio	X	N+M			(70)730		X
Quili Malal	Agrio	X	N+M		X	(80)3500		X
Cerros Colorados	Agrio		N			15 000		
Altiplano Las Lajas	Liu-Cullín	X	N		11 000	2 000		X
Piedón Leufén	Limay	X	N			16 000 ^{c/}		X
Añelo-Punta Sierra	Neuquén		N					
Colonia Centenario (planicie)	Neuquén		N					
El Chenque	Subterráneas		N			100 000		
Cutral-có Sto. Domingo	Laguna Blanca		N		9 000	11 200		
Laguna Blanca	Los Toldos y O.							
Rincón de los Sauces	Colorado		N			10 000		
San Gabao-Río Chimahuino	Lago Huechulafquén				105 000	105 000	X	X
<u>Totales</u>					<u>115 000</u>	<u>92 830</u>		

a/ N: Áreas incultas a regar; M: áreas regadas a mejorar.

b/ Las cifras entre paréntesis indican áreas actualmente regadas. Las otras, las áreas totales a servir, incluyendo las actualmente regadas.

c/ Si se construye el embalse de Cerros Colorados el área regable se reduciría a 6 500 hectáreas.

57. Tanto las obras sanitarias como las de riego que sirven a la parte de Neuquén aledaña a su ciudad capital son interprovinciales. El dique Contralmirante Cordero por el que riega una pequeña parte del territorio neuquino, y ~~todo~~ el Alto Valle del Río Negro, del que una parte pertenece a Neuquén, están, parcialmente en territorio neuquino. Las obras proyectadas en el Chocón estarán también, mitad en territorio neuquino y mitad en el de la vecina provincia de Río Negro. La obra proyectada en Cerros Colorados ubicará íntegra en Neuquén, pero será operada conjuntamente con la primera. Ya el Gobierno nacional exteriorizó en 1961 su interés en transferir a las provincias - entre ellas Neuquén - la administración de las obras de riego que había construido en ellas bajo la Ley 6546, aunque reservándose la operación de las centrales hidroeléctricas. Cuando esto ocurra, deberán encontrarse los caminos institucionales para una acción coordinada entre los gobiernos de las dos provincias mencionadas y N/AEE ~~(esta última en la medida de su interés en las obras eléctricas)~~. N/OSN, que sirve a las principales ciudades neuquinas y rionegrinas del Alto Valle, con aguas del sistema del río Negro, también debería participar en un convenio de coordinación, si es que no se consuma la ~~también~~ anunciada transferencia de las obras manejadas por ella a los gobiernos provinciales. El Alto Valle - o región del Comahue - es una región, desde el punto de vista económico, que constituye un todo integrado. Los ríos que le sirven constituyen un mismo sistema o cuenca hidrográfica, y ello conduce también a la necesidad de operación conjunta y coordinada. Hay en ella distintos sectores de usuarios o beneficiarios identificables: 1 regantes, 2 consumidores de agua potable, 3 usuarios de hidroelectricidad, 4 beneficiarios del control de las inundaciones, 4 eventualmente usuarios del río en navegación. Todos ellos deberán contribuir a la construcción, mantenimiento y operación de las obras y, consecuentemente, participar en su administración. Lo reseñado basta para mostrar al del Alto Valle - incluido en el Neuquén - como un caso típico donde se justifica la creación de una autoridad hídrica regional (o, en el caso, de "subcuenca"), que supere las fronteras políticas. Quizás sea útil aprovechar la oportunidad de su organización para estimular a que los regantes y otros usuarios de esa área tomen una más activa participación en el manejo de sus intereses hídricos.

10. Provincia de Río Negro

58. La Constitución (1957) contiene las siguientes reglas para la organización de la autoridad hídrica:
- a) una agencia autárquica debe ser creada para administrar las aguas públicas, y ejercer la policía de las privadas. (art. 46);
 - b) dicha agencia, cuyo nombre fija la Constitución (Departamento Provincial de Aguas RN/DPA), debe ser manejada por un Superintendente General y un Consejo de al menos 5 miembros nombrados por 4 años. Las autoridades de canales, electas por los usuarios, deben integrar dicha agencia, pero con personalidad y responsabilidad propias. Este es el sistema mendocino, aunque en Río Negro aún no tiene aplicación en la práctica. Pero a diferencia de Mendoza, representantes electos por los usuarios deben obligatoriamente integrar los órganos directivos del RN/DPA. La Constitución permite que el Superintendente sea nombrado por P.E. (en cuyo caso necesita acuerdo legislativo), o que sea electo por los usuarios. (art. 47);
 - c) como en Mendoza la Constitución garante el derecho de los usuarios a elegir las autoridades de los canales, y las de éstas a administrar las rentas de los canales, son electores no sólo los titulares de concesiones, sino sus arrendatarios y contratistas, esto es quienes ejercen la tenencia de la tierra y el agua;
 - d) compete al RN/DPA: 1° la administración y conservación de las obras fundamentales sobre ríos y arroyos, embalses, diques distribuidores y canales matrices de ellos derivados (las demás obras deben ser administradas directamente por los usuarios); 2° la jurisdicción hídrica administrativa, contenciosa o no, pero las instancias administrativas no deben exceder de dos, lo que corrige un defecto mostrado por la experiencia mendocina; 3° la fijación anual de sus presupuestos y de la "cuota de sostenimiento" o tributo con el que cubre sus gastos ordinarios, y de las de reembolso de "obras locales" o construidas con fondos puestos bajo su administración. Esta verdadera autonomía implica el ejercicio de poder impositivo, y una completa independencia del P.E. y de la Legislatura en materia presupuestaria e impositiva. (art. 54);

e) la construcción de obras "fundamentales" (diques de embalse o distribuidores, grandes canales, etc.) requiere autorización legislativa.

El P.E. puede proyectar obras de esa magnitud, pero si lo hace está obligado a requerir el asesoramiento técnico del RN/DPA. (art. 53).

59. El Código de Aguas. L.RN/285 (1961) crea el Departamento Provincial de Aguas (RN/DPA), como agencia autárquica (de relativa autarquía, como se verá luego) de derecho público, pues delega en él la autoridad hídrica. Pero dispone además que en la actividad "empresaria", esto es, de construcción de obras y prestación de servicios, actuará como persona de derecho privado bajo las normas de éste y no de las administrativas (art. 104). Las reglas a él relativas se encuentran desperdigadas a través de todo el Código, pues si bien la tercera parte (arts. 104/117) le está íntegramente dedicada, también los artículos 33 y 3 contienen definiciones funcionales de sus responsabilidades.

El otorgamiento de concesiones de agua compete al RN/DPA, pero el de las playas y riberas y la implantación de reservas hídricas al P.E. sin que aparezca justificado este desdoblamiento de atribuciones sobre recursos físicos que constituyen unidades. Ciertos impuestos los fija el RN/DPA (cuota de sostenimiento) y otros el P.E. (regalía). La autarquía patrimonial que le garanten los artículos 46 y 54 de la Constitución se inspira en el modelo mendocino y es, en Mendoza, primordialmente el éxito de su autoridad hídrica. Pero el Código rionegrino, cuyo proyectista cita la legislación mendocina como fuente de tantas otras de sus normas, en este caso se aparta desafortunadamente, de su modelo, menguando la autarquía del RN/DPA que su propia Constitución le impone: a) en el Art. 3g y en el Art. 107 inc. 10, conceden recursos de apelación ante el P.E., lo que le coloca en subordinación jerárquica; b) los artículos 108 y 114 someten a la aprobación del P.E. la estructura funcional interna, los cánones y tarifas, el plan de acción y el Presupuesto, cuando según la Constitución ello es de resorte exclusivo del RN/DPA; c) el Art. 106 inc. 6 autoriza al P.E. a "fijar" funcionarios, que integran el RN/DPA; d) el Art. 111 inc. 3 permite, en ciertos casos, al P.E. designar autoridades de cauces y el 67 en los consorcios.

60. EL RN/DPA está integrado por los siguientes órganos: 1° el Superintendente General, 2° el Consejo Superior de Aguas Públicas, 3° los Intendentes Delegados, 4° los Inspectores Delegados, 5° los Compartidores y Delegados de los cauces o los Consejos Directivos de los consorcios, según los casos.

La ley nada dice sobre la sede de estas autoridades, pero la primera tiene asiento en Viedma, la ciudad Capital. Sin embargo, más del 75 por ciento del total regado en la Provincia lo forma el Alto Valle del Río Negro, distante alrededor de 400 km y esa circunstancia da derecho a preguntarse si no debería estar allí el asiento de la autoridad hídrica.

61. El Superintendente General es designado por el P.E. con acuerdo legislativo. El Código no dice por cuánto tiempo. Es el jefe de la autoridad hídrica, otorga y revoca las concesiones, impone servidumbre, aprueba los proyectos de obras privadas y propone el de las públicas, cobra e invierte las rentas, nombra al personal, decreta la distribución por turno, ejerce la policía de las aguas públicas, impone la formación de consorcios, tiene poder reglamentario y ejerce atribuciones jurisdiccionales en conflictos con o entre particulares (con apelación ante el P.E.). Pero, como se apuntó ya, debe someter los actos más fundamentales a aprobación del P.E.

62. Los Inspectores Delegados (uno para cada río) lo son del Superintendente, de quién dependen jerárquicamente, aunque a la fecha de este informe no habían sido puestos en actividad, y ejercerán en cada río la autoridad y demás atribuciones de aquél. En los lugares donde existan obras hidráulicas provinciales, la operación y conservación de éstas está a cargo de un Intendente Delegado (uno para cada sistema de obras). Es decir: los Inspectores ejercen la autoridad administrativa y jurisdiccional y los Intendentes cumplen la actividad "empresaria". No se advierte la necesidad de esta duplicidad de funcionarios, pues ambas tareas pueden ser cumplidas por la misma persona. En cuanto a las funciones jurisdiccionales de los Inspectores, siendo éstos jueces de apelación de las decisiones de los Compartidores (art. III inc. 14), y siendo apelables las de los Inspectores ante el Superintendente, quedan definidas tres instancias, contra lo dispuesto por el artículo 49 de la Constitución que las limita a las dos.

63. Para administrar los canales el Código permite escoger entre dos sistemas; o la constitución de un "consorcio", o la formación, de hecho, de una comunidad

de usuarios. Los consorcios - cuya figura jurídica no está definida ni reglada en las leyes substantivas - pueden ser formados por voluntad de los interesados o impuestos obligatoriamente, de oficio, por el Superintendente, a todos los usuarios por un mismo canal. Cuando hay usuarios propietarios de lotes urbanos o suburbanos, todos ellos son representados colectivamente como un solo "consorciante", por un personero designado por la Municipalidad del lugar. El objeto del consorcio es distribuir entre sus miembros - voluntarios u obligados - las cargas financieras, tanto de obras a construir como de los gastos anuales de explotación de obras ya construidas. El acto constitutivo del consorcio debe ser aprobado por la autoridad hídrica, y debe incluir un estatuto que debe definir la composición y forma de elección de las autoridades y la medida en que cada consorciante participa en los gastos. No se puede formar parte de un consorcio sin antes ser titular de una concesión hídrica. El rol o padrón del consorcio no sólo incluye a las personas que lo forman sino a los inmuebles titulares de las concesiones. Las decisiones de la Comisión Directiva (a la que el Código también llama Consejo de Administración) obliga a los disidentes y ausentes, pero las que imponen contribuciones son impugnables ante la RN/DPA hasta hasta seis meses después de publicadas. Este parece un plazo demasiado largo, cuando se trata de los gastos anuales de conservación y manejo, y el hecho de que tales decisiones permanezcan abiertas a impugnación durante la mitad del período será un obstáculo para el buen funcionamiento financiero de los consorcios. Puede, por decisión espontánea, o por voluntad imponible coercitivamente por el P.E. (y no por el RN/DPA) formarse consorcios de consorcios, esto es, consorcios de segundo grado. Aunque el Art. 57 habla únicamente de "derivaciones con destino a la agricultura", como determinantes de la formación de consorcios, el Art. 60 permite que puedan integrarlos dueños de establecimientos industriales, y, debe suponerse que también otras clases de usuarios.

64. Cuando en un canal no se ha constituido el consorcio, todos sus usuarios integran una "comunidad de usuarios", figura - la de comunidad - que tampoco está reglada ni definida en las leyes sustantivas. Dichos usuarios deben elegir un "compartidor" y si el canal riega más de 500 há y los usuarios

son 7 o más, tres delegados. Según el inciso 1 del art. 111, para ser electo hay que ser usuario y reunir "la mayoría simple de los usuarios que representen la mitad más una de las hectáreas regadas" (parecería que usuarios no regantes no votan). Simultáneamente con esa elección los usuarios deben elegir "~~electores~~ electores de consejeros" del Consejo Superior de Aguas, pero para la elección de éstos el inciso 6 del mismo art. 111 exige mayoría absoluta y no simple. No se advierte con qué objeto sea preciso elegir electores de consejeros, y con distinta mayoría, pues tal función podría ser cumplida por los propios compartidores, simplificando las cosas. Estos funcionarios (incluidos los delegados cuando los hay) autorizan las obras a ejecutarse en sus canales y aprueban sus presupuestos, fijan las prorratas con que cada usuario debe contribuir a los gastos del canal, y designan su propio personal, a propuesta del compartidor. El compartidor administra los fondos y los recauda, y rinde cuentas a los delegados. Puede imponer multas y es juez de primera instancia en asuntos hídricos entre sus usuarios. Frente a la reglamentación de las comunidades de usuarios explicada, la constitución formal de consorcios parece innecesaria, salvo cuando se tratara de consorcios para obras por construir. A la fecha de este estudio (diciembre 1963) funcionaban dos consorcios: el de Peñas Blancas, sobre el río Colorado, con concesiones potenciales para 11 470 há; y el de Campo Grande, sobre el río Negro, con concesiones para 5 170 há.

65. Todos los "electores de consejeros", electos por consorcios o comunidades, que riegan por obras particulares, reunidos en Asamblea, eligen un miembro del Consejo Superior de Aguas. Y todos los electores de consejeros electos por consorcios o comunidades que riegan por obras provinciales escogen otro.

Estos dos consejeros, más un Presidente y otros dos consejeros técnicos, designados estos tres por el P.E., forman el Consejo Superior de Aguas Públicas, que a la fecha del presente informe no funcionaba todavía. Los cinco son electos por 4 años, y según la Constitución deben renovarse por mitades cada dos años, pero el Código ha omitido prever esta situación. El alcance de sus funciones lo define el art. 113, que exige su resolución favorable; para la validez de las decisiones que se adopten respecto de los siguientes actos:

1) reconocimiento de derechos de uso de aguas anteriores al Código, y otorgamiento de nuevas concesiones y permisos, 2) decisión sobre prioridad entre solicitudes de concesión concurrentes, 3) sustitución por uno de otra fuente, del caudal de agua o de energía hidráulica concedido, 4) formación forzosa de consorcios o comunidades de usuarios (según los arts. 57 y 111 estas últimas existen de hecho), 5) implantación de reservas de aguas o de pendientes, 6) otorgamiento de concesiones o permisos sin cargo de contribuciones, 7) formulación del Presupuesto del RN/PDA. Pero el texto legal no dice que sus acuerdos sean finales en esas materias, y puede ocurrir que el Superintendente, o el P.E. en su caso, no los homologuen o que, simplemente, no se expandan. Además, y esta vez por sí solo, el Consejo puede: 1) dictar normas para coordinar observaciones hidrográficas y meteorológicas, 2) reglar la interconexión de aprovechamientos hidroeléctricos. Finalmente debe opinar sobre los planes de utilización de los cursos de agua pública.

66. Hay que advertir que el sistema explicado no rige en el valle inferior del Río Negro sujeto a la L.RN/200 (1961), que creó el IDEVI, a la que se alude luego, donde están en curso obras para poner bajo riego un área bruta de alrededor de 8 000 há. Como juicio de conjunto sobre el sistema administrativo instituido por el Código de Aguas habría que señalar, además de las innecesarias duplicaciones ya apuntadas (Inspectores e Intendentes, consorcios y comunidades), de la inconveniente mengua de la autarquía del RN/DPA, y de la inapropiada sede de éste, otro defecto igualmente fundamental. En la Provincia de Río Negro existen al menos 6 áreas de riego bien definidas, de distinta dimensión, pero separadas entre sí, con intereses a veces contradictorios, y con distinto grado de desarrollo hídrico: Alto Valle del río Negro, Valle Medio del mismo (Choele-Choel, Chimpay-Belisle y Conesa), Valle Inferior (Viedma), Peñas Blancas sobre el río Colorado, Andersen y Río Colorado (sobre el río homónimo), y Valcheta. A la mayor parte las administra todavía N/AEE. Otra está en formación por el RN/IDEVI. Otras se sirven de obras privadas, pero están bajo control de la RN/DPA. El Consejo Superior de Aguas debería estar integrado por representantes de esas áreas, y en número proporcionado a la magnitud de cada una. La autoridad hídrica, y el mismo Consejo deberían tener su sede en la más importante, y no en una aún en formación, desde

la cual "teleadministra" a las otras. El hecho de abastecerse de tres cuencas distintas (Negro, Colorado y Valcheta) esos sistemas de riego, no ha sido tampoco considerado en el Código, violentando el sano propósito constitucional de una efectiva participación de todos los usuarios en la administración de las aguas y en todos los niveles de ésta. El distinto grado de desarrollo hídrico también debe contar en la estructuración de la autoridad correlativa. La "conciencia de regantes" y el espíritu de los usuarios de zonas ya formadas y con tradición hídrica, no pueden ser los mismos que los de quienes recién se aprestan a empezar, y hay que dar cabida a ambos criterios en el Consejo, aunque en proporción a la magnitud de sus respectivos intereses.

N/AEE administra las obras hidráulicas en los valles alto y medio de río Negro, construidas por ella y su antecesora la ex-N/DGI. Las que tenían en construcción en el valle inferior y las de Valcheta han sido transferidas, sin cargo, a RN/IDEVI las primeras y a RN/DPA las segundas según DL.N/8731 (1963). El régimen federal de administración de sistemas de riego, emergente de la L.N/6546, es explicado, en general, en el Cap. 4, C.

La concurrencia de organismos federales y provinciales administradores de recursos hídricos no es la solución óptima, cuando ambos se sirven de los mismos ríos, y en una Provincia de alto grado de desarrollo hidráulico. Además crea problemas: la L.RN/105 (1959) autorizó interinamente a N/AEE a suministrar agua de riego a tenedores de tierras fiscales provinciales en Choéle-Choel, por un plazo fijo, y sin que tal suministro creara precedentes ni en cuanto a la titularidad de las tierras ni de los derechos de aguas. El DL.RN/900 (1963) prorrogó ese plazo. En relación al río Colorado la L.RN/211 (1961) autorizó al P. E. provincial a convenir con N/AEE la terminación de las obras de riego y de generación hidroeléctrica en Andersen, debiendo el P.E. provincial buscar financiación para ello. Como se dijo en el párrafo precedente, relativo a Neuquén, N/AEE ha manifestado su deseo de desprenderse de la administración de todas sus obras de riego, entregándola a las provincias donde están situadas, pero conservando el manejo de las que a la vez sirven a la generación eléctrica, pues este último es un campo en el que N/AEE desea seguir operando. En 1959 fueron proyectados por encargo de N/AEE los instrumentos legales para consumir tal transferencia, a base de la creación de un ente interprovincial (Río Negro-Neuquén),

con participación de los usuarios en su administración, el que asumiría el manejo de las obras hidráulicas del Alto Valle, no sólo para riego, sino también para abastecimiento doméstico y municipal, y eléctrico. Esta solución parece la más adecuada, sobre todo en mira a operar el dique Contralmirante Cordero y las obras a él conexas, contemplando sus fines múltiples: riego, hidroelectricidad, control de crecientes (lago Pellegrini). Nada obstaría a que ese ente manejase el dique y entregase la electricidad en barra a N/AEE o a quien tuviese a su cargo la distribución eléctrica. Ocurre que ese dique y el sistema de canales de él derivado fueron originalmente proyectados y construidos para un fin singular: riego. Este uso, en esos lugares pedemontanos con aguas muy turbias, requiere una periódica interrupción del suministro de agua, para dar lugar a la limpieza ("desareno") del dique y de los canales, de los depósitos que las aguas dejan en ellos por sedimentación de sus arrastres sólidos. En Mendoza, en condiciones hidrológicas similares, como se explicó ya, esa interrupción es hebdomadaria (un día y medio semanal), y además anual (todo el mes de Julio). En el Alto Valle rionegrino se hacía también así inicialmente. Pero más tarde se adicionó a esas obras, construidas para un solo propósito, un segundo fin: la generación hidroeléctrica. Estas se convirtieron así en de uso múltiple, sin haber sido concebidas como tales. Al amparo de la instalación de centrales eléctricas sobre los canales de riego y del deseo de la agencia operadora de conceder prioridad al desarrollo eléctrico, se establecieron importantes industrias, grandes consumidoras de electricidad, y también fue atendido desde ellas el consumo de poblaciones vecinas. Ello la llevó a suprimir los "desarenos" periódicos, en interés de la ininterrupción del abastecimiento eléctrico. Pero también produjo el "embanche" del dique y los canales. Su limpieza cuesta desde entonces subidas sumas, en tanto que antes las aguas la hacían por sí mismas, durante los períodos semanales de apertura de las compuertas del dique. Se plantea ahora, además, el problema de si tales gastos deben ser soportados por los regantes, o por los usuarios eléctricos, o por ambos. Este tipo de problemas es el que puede resolver con eficiencia una agencia donde estén representados todos los sectores de usuarios y gobiernos interesados, y que pueda atender al manejo integral y coordinado

de los fines múltiples. Adviértase que esas obras sirven, parcialmente, también para control de crecientes, y que hay beneficiarios de tal control, (incluso algunos que no usan aguas) aguas abajo, que no contribuyen a pagar ese servicio. Convendría pues que los gobiernos de Río Negro y Neuquén aceleren la recepción de las obras aludidas y la organización de un ente como el sugerido.

67. La L.RN/200 (1961) creó y organiza el Instituto de Desarrollo del Valle Inferior del Río Negro (RN/IDEVI). Esta es una agencia de desarrollo integrado de una subcuenca hidrográfica, a base, primordialmente, del aprovechamiento óptimo de sus recursos hídricos, del tipo preconizado en el estudio de CEPAL sobre el tema. Es la primera de ese tipo (agencia para desarrollo regional integrado, con concentración de funciones) que se crea y actúa en Argentina. A la fecha del presente estudio (diciembre 1963) estaba en comienzo su organización e instalación. El Gobierno de Río Negro recibió del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) un préstamo de US\$5.5 millones, con destino a la ejecución de la primera etapa del "Programa de Desarrollo del Valle Inferior del Río Negro (Proyecto "Viedma"), y el RN/IDEVI fue creado exclusivamente para cumplir tal Programa. La estructura institucional de RN/IDEVI fue examinada por el BID antes de otorgar el préstamo, y éste lo acordó, entre otras consideraciones, a base de juzgar que ese es el tipo de agencia apropiado para llevar adelante un programa de esa clase. El Fondo Especial de las Naciones Unidas hizo además, simultáneamente, una asignación - para cuyo manejo designó a FAO como agencia ejecutora - para realizar un proyecto tendente a completar y auxiliar la labor de RN/IDEVI instalando una estación agrícola experimental, y a hacer los estudios, proyectos y diseños de detalle faltantes para la implementación final en el terreno del Proyecto Viedma.

Una de las cláusulas del préstamo del BID (Resolución DE-51/62), art. 7, c es que "cualquier modificación de las disposiciones legales o de los reglamentos básicos concernientes al RN/IDEVI...deberá ser motivo de

/ CEPAL, Sistemas de organización administrativa para el desarrollo de cuencas hidrográficas (Santiago, 1959), doc. E/CN.12/503.

consulta previa ante BID". Por su parte el art. 2 de la L.RN/200 dispone que "no podrán ser disminuidas las facultades del RN/IDEVI mientras tenga obligaciones pasivas pendientes con organismos de crédito". Las principales características orgánicas del RN/IDEVI son:

- a) tiene doble personería: de derecho público, en cuanto ejerce autoridad de ciertas materias, y de derecho privado en cuanto puede actuar en actividades empresarias de tipo privado, bajo las leyes ordinarias.
- b) tiene un área de jurisdicción territorial físicamente definida: el valle inferior del Río Negro, donde debe ejecutarse el Proyecto Viedma, para cuya realización fue creado.
- c) su competencia funcional es amplísima, pero definida y delimitada a completar y mantener actualizada la programación del desarrollo económico y social de su área, y a ejecutar tal programa. Le compete construir y administrar las obras generales de riego, drenaje, defensa contra inundaciones y agua subterránea. Los canales secundarios y terciarios deben ser construidos por RN/IDEVI pero entregados a la administración de los consorcios de usuarios. Las obras de agua potable deben ser administradas por RN/IDEVI mientras los municipios interesados no expresen su voluntad de asumir su administración. Debe construir también las demás obras y trabajos públicos provinciales, no hidráulicos, dentro de su área (caminos, escuelas, hospitales, etc.), y las obras (tales como vivienda) destinadas a ser transferidas a particulares, pero que convenga sean construidas y financiadas por el Estado. También le compete la generación y distribución eléctrica en el área, aunque no goza de monopolio. Debe proyectar y construir los nuevos núcleos urbanos, y sus obras y servicios públicos básicos, para entregarlos a la administración de los respectivos municipios, cuando éstos sean organizados y puestos en funcionamiento. Del mismo modo puede contribuir a la ampliación de la ciudad de Viedma, que queda dentro de su área, mediante convenio con su Municipalidad. También debe construir los sistemas de comunicaciones (caminos, aeródromos, telecomunicaciones, teléfonos) dentro del área y su conexión con los externos.

La formación y entrenamiento de personal técnico y profesional en las especialidades necesarias para la ejecución de sus programas, excluida la enseñanza primaria o común, también atañe al RN/IDEVI. La organización y fomento de las industrias derivadas de la producción agrícola y pesquera del área; los servicios asistenciales sanitarios y recreativos; la canalización de ahorro hacia inversiones en el área (incluso por el camino de promover la formación de empresas privadas), son los demás temas de su responsabilidad funcional. Este excluye las funciones políticas (justicia, policía de orden, enseñanza común, etc.).

- d) debe actuar en coordinación con el gobierno provincial y los municipios dentro de su área, y también con las agencias interprovinciales y nacionales que tengan responsabilidades en ella.
- e) ejerce la Intendencia de Aguas en su área, como delegado de RN/DPA, con las funciones más arriba explicadas, que el Código de Aguas atribuye a los Intendentes. Es decir, ejerce la administración y policía de las aguas, dependiendo, en ésta sola materia, jerárquicamente, del RN/DPA. La Ley N.º 17.200 concede derecho de aguas para riego, usos industriales y domésticos a las 8 700 há que forman el área donde está en ejecución la primera etapa del plan de desarrollo, a cargo de RN/IDEVI, cuya superficie debe ser previamente adquirida o expropiada por RN/IDEVI.
- f) integran su patrimonio todas las tierras públicas provinciales sitas dentro de su área; los aportes financieros fijos que el gobierno provincial se obligó a efectuarle, en préstamo, durante los primeros seis años; las obras hidráulicas construidas por N/AEE que ésta transfirió gratuitamente por D.L. N.º 8731 (1963); el préstamo del BID, y sus ingresos por los servicios públicos que preste y por venta de tierras a los colonos.
- g) le manejan un Consejo de Administración y un Gerente General. El primero está compuesto por un Presidente, designado por el P.E. provincial con acuerdo legislativo y un delegado del mismo E.E. designado sin dicho acuerdo; el Director Ejecutivo del Banco de

la Provincia; el Contralor General y el Subsecretario de Economía de la Provincia; el Superintendente de la RN/DPA; tres representantes de los usuarios de aguas y servicios del propio IDEVI electos por ellos; el Presidente del Instituto Provincial de Colonización (cuando éste sea creado, como lo manda la Constitución provincial); y, si las respectivas agencias federales aceptan enviarlos, delegados de N/AEE, Consejo Agrario Nacional e Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. El presidente durará años (el mismo término que el Gobernador que lo nombra) y los delegados de los usuarios 6. El Gerente General es el secretario nato del Consejo. El Consejo aprueba el programa de trabajos y el Presupuesto que le presenta el Gerente General; los proyectos de convenios con otras agencias gubernamentales u organismos internacionales de crédito; las tarifas, tasas y cánones que cobra el RN/IDEVI, pero si no se expide en 30 días desde que le son sometidas, rigen las propuestas por el Gerente; contrata al Gerente General, por 6 años, previo concurso público; fija por zonas y categorías, los precios de venta y condiciones de pago de los lotes de tierra colonizada que ponga en venta; aprueba las expropiaciones y compras de inmuebles; decide en última instancia administrativa las apelaciones contra las resoluciones del Gerente tomadas en ejercicio de la autoridad pública; expide reglamentos de vigencia en su área, de todas las leyes provinciales que tengan relación con sus funciones, incluso reglas de "zonificación", pero el Gobernador tiene el derecho de observarlos en plazo de 10 días; y se dicta su propio reglamento. Debe reunirse mensualmente.

- h) el control del manejo patrimonial (a cargo del Gerente General) se rige por reglas ad hoc, que expide el Consejo, y no por la ley de contabilidad pública, y se hace por auditores contratados por éste que no dependen del Gerente. Las cuentas de éste son juzgadas por el Consejo, previo informe de los auditores.
- i) el Gerente General es la autoridad ejecutiva, y el eje de la actividad del RN/IDEVI: nombra y remueve a todo el personal, excepto los auditores; administra los fondos; es la autoridad ejecutiva de

aplicación de las leyes y reglamentos que competen al IDEVI; y como tal es la autoridad jurisdiccional de aguas de primera instancia, ~~se~~ organiza internamente y puede delegar parte de sus funciones, bajo su responsabilidad en ^{gerentes} ~~subgerentes~~ sectoriales o zonales. Como es nombrado por contrato, que le asegura inamovilidad, éste sólo puede ser rescindido judicialmente. Mediante causa justificativa, el Consejo puede suspenderlo, por simple mayoría si los auditores hubiesen producido un informe desfavorable a su gestión contable, y por 2/3 en los demás casos. Representa por sí solo al RN/IDEVI ante el público y los empleados y conjuntamente con el Presidente del Consejo de Administración, ante los poderes públicos nacionales o provinciales y agencias internacionales.

- j) los usuarios - agrupados en consumidores de agua, de electricidad y miembros de cooperativa agrícolas - participan en la administración, eligiendo un personero cada uno de los tres grupos indicados para que en su representación integre el Consejo de Administración. Esto ocurrirá cuando cada uno de sus grupos esté integrado al menos por 100 personas. El voto es secreto y para evitar la interferencia de esas elecciones con las políticas, las de consejeros no pueden realizarse dentro de los 90 días anteriores o posteriores a las de autoridades políticas. Mientras no se alcance el mínimo de 100 integrantes por grupo, los representantes de los usuarios son designados por la Legislatura, 2 por el partido mayoritario y 1 por la primera minoría. La Gerencia General debe promover la constitución en consorcios de los regentes de su jurisdicción, y en cooperativas la de los consumidores de electricidad.
- k) para el cobro de impuestos y tarifas, RN/IDEVI goza de los mismos privilegios y procedimientos que el fisco provincial.
- l) RN/IDEVI puede expropiar todas las tierras de dominio privado sitas en su área de jurisdicción, pero los propietarios expropiados pueden retener un lote de entre 20 y 160 háq, según su capacidad de trabajo y capital. Los actuales tenedores (arrendatarios, etc.) de tierras

privadas, y ^{expropiados} ~~compensados~~ o adjudicatoria sin título de tierras públicas, tienen prioridad para comprar los lotes que ofrezca el RN/IDEVI. El precio debido por RN/IDEVI a los expropiados puede ser compensado por éstos con lo que deban pagar por el "canon de obra" a que se alude más abajo. El poder de expropiación sólo puede ser ejercido una vez, sobre un mismo inmueble, por RN/IDEVI. Para ejercerlo una segunda, necesita autorización legislativa.

- m) el costo total de las inversiones públicas y gastos financieros conexos del Programa de Desarrollo del Valle Inferior (proyecto Viedma) debe ser dividido por el número de hectáreas al que se aplica el Programa, pero clasificando a éstas en urbanas y rurales, a cada una de cuyas categorías se da un tratamiento impositivo diferente. El resultado es el "canon de obra", que se aplica y cobra por hectárea, incluso a los inmuebles sitios en radio municipal, pues éstos también reciben un beneficio indirecto, del Programa de Desarrollo. El canon de obra se cobra cada año, calculado sobre las inversiones hechas durante el mismo año, y durante el plazo total de ejecución o financiación del Programa.
- n) los gastos de administración general del RN/IDEVI, y los de prestación de servicios de uso directo (agua potable o de riego, energía, comunicaciones, transporte) no se computan en el cálculo del canon de obra. Los de prestación de servicios incluyendo los de reposición y gastos financieros se recuperan a través de tarifas y cánones, que fija el Consejo de Administración, y que se cobran en proporción al uso hecho de cada servicio.
- ñ) si los compradores de lotes al RN/IDEVI los revenden, deben pagar un impuesto que grava la plusvalía calculada entre el precio de compra original más el capital incorporado y el de reventa.
- o) el agente financiero y Tesorero de RN/IDEVI es, obligatoriamente, el Banco de la Provincia de Río Negro. Este está autorizado a invertir parte de su capital y reservas en bonos al portador que emita RN/IDEVI.



p) IDEVI actúa y debe organizarse en su régimen interno y relaciones con el público, como empresa privada, bajo la legislación común, excepto cuando actúa como autoridad. Pero en este último caso su autarquía es plena, pues las decisiones de su Consejo de Administración no son recurribles ante el P.E. provincial, siendo sólo susceptibles de recurso contencioso administrativo ante el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia. Este no puede revisar sus decisiones en los aspectos de oportunidad o conveniencia, si no, solamente, en los de legitimidad.

q) el artículo 28 de la ley prohíbe a RN/IDEVI prestar servicios a pérdida. Y prescribe que una vez amortizados todos los préstamos recibidos, sus tarifas incluirán una utilidad equivalente a la que obtendría una empresa privada, la mitad de la cual será entregada al Gobierno provincial. Este percibe, además, desde el comienzo, el impuesto inmobiliario territorial, la regalía hídrica, y demás tributos ordinarios que graven los inmuebles actividades o personas sitos en el área, excepto aquellos que se superponen con los definidos en "m", "n" y "ñ" precedentes como rentas propias del RN/IDEVI.

68. El Gobierno de Río Negro ha cumplido alguna vez ^{sus} ~~su~~ funciones asistenciales en materia hídrica, dando en préstamo para el acondicionamiento de canales, maquinaria pesada para movimiento de tierra, a grupos de regantes, que de su parte han pagado los gastos de su funcionamiento. D.RN/399 (1960).

69. Su Código de Aguas dedica gran parte de su articulado a estructurar un organismo para el manejo de las aguas en sus diversos usos: la ST/AGAS. Esta agencia es relativamente autárquica, pero puede ser intervenida (si irregularidades en su funcionamiento lo hacen indispensable) con autorización de la Legislatura y por un término no mayor de seis meses. Su personal lo designa el Poder Ejecutivo, su presupuesto, anual, lo aprueba la Legislatura, la administra un Consejo General, constituido por un presidente con título de ingeniero civil o hidráulico, expedido por Universidad Nacional y seis consejeros. Tres de ellos son los jefes del Departamento de Ingeniería, del Departamento de Explotación y del Departamento Legal. Los otros tres representan a los concesionarios.

Tanto el Presidente como los consejeros funcionarios son designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, son inamovibles mientras dure su buena conducta, y sus sueldos fijados por ley de presupuesto, no pueden serles reducidos de un año a otro.

Los rperes de los concesionarios duran tres años y son reelegibles.

No se observa la existencia de órganos de control del cumplimiento de los planes, lo que unido a la anualidad de los presupuestos, dificulta la ejecución de programas de largo plazo.

Tiene funciones de investigación, promoción, construcción de obras y policía. Dicta normas sobre regadío y demás servicios a su cargo, y actúa como Tribunal de Aguas.

70. La administración de los canales por los regantes constituye un principio consuetudinario en Salta, heredado del derecho indiano, que a su vez lo recibió del peningular.

El legislador quiso respetar el antecedente, pero en homenaje a una técnica jurídica más depurada, siguió el modelo mendocino y al proyecto de 1939 para la Provincia de Buenos Aires.

La existencia de consorcios de usuarios emana de la ley, que los crea con todos los concesionarios de agua pública que se surtan de una misma hijuela.

Su función es administrar la hijuela, es decir, fijar y cobrar las prorratas y disponer de tales sumas conforme a los fines de su percepción. Son ministrados por una Junta de tres delegados presidida por un Inspector, elegidos por los usuarios.

71. Los canales principales, los diques o los cauces naturales de los que derivan las hijuelas son administrados por una Junta de Inspectores.

Sus funciones son similares a las de las Juntas de delegados que administran los consorcios, y además deben disponer los turnos para el reparto del agua entre los canales e hijuelas, y tomar la iniciativa de proponer la realización de estudios y proyectos de obras.

72. La prestación del servicio público del suministro de Agua potable por N/OSN o por las Municipalidades se comenta en el Capítulo IV, A.

73. Las atribuciones de ~~ST~~/AGAS en materia eléctrica han sido absorbidas por el ~~ST~~/CES creado en 1963.

74. Los gastos generales de ST/AGAS, y los de estudios, proyectos, construcciones, conservación, servicio y explotación de las obras deben ser sufragados con el Fondo Hidráulico formado principalmente por las tasas, cánones y contribuciones a cargo de los regantes, un 10 por ciento de los impuestos provinciales de contribución territorial, patentes y sellos y aportes nacionales. Para la ejecución de obras se autorizó al Poder Ejecutivo a emitir hasta \$ 20 000 000 cada diez años, de títulos de renta pública.

75. La ley de organización y funcionamiento de las Municipalidades L.ST/1349 (1933) les confiaba la reglamentación del servicio y la distribución de las aguas públicas de regadío de uso común en los municipios, mientras no se dictase la ley de irrigación, reconociendo así la vigencia de las viejas ordenanzas municipales, lo que determinó algunas resistencias al admitir la jurisdicción del ST/AGAS, que fueron obviadas mediante convenios.

76. Existen en Salta obras que fueron construídas por la Nación en virtud de que la provincia adhirió a la L.N/6546 (1909) de Irrigación por L.ST/850 (1910), pero actualmente a esas obras las administra la Provincia.

12. Provincia de Salta ~~Provincia de San Juan~~

77. El SJ/DH tiene "a su cargo el gobierno, administración y policía de las aguas", según reza la L.SJ/886 (1942).

Estas funciones las comparte con la SJ/DAOS y N/OSN, que tienen a su cargo el abastecimiento de poblaciones, SJ/IPE y N/AEE que se ocupan de la generación de energía hidroeléctrica, y con el Ministerio de Salud Pública en materia de infección de las aguas.

Es una entidad autárquica administrada por un Consejo integrado por un Director General, designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo legislativo; dos directores que deben tener título universitario expedido por universidad nacional y son designados por el Poder Ejecutivo; y por tres representantes de los regantes. Todos duran cuatro años.

Además de las funciones arriba señaladas, debe realizar estudios, llevar estadísticas y hacer investigaciones.

En materia jurisdiccional, conoce y decide en todas las cuestiones administrativas relativas al uso y aprovechamiento del agua. Contra sus decisiones puede interponerse recurso jerárquico (legislado por el D.SJ/427 (1953)).

78. Todos los departamentos (subdivisiones políticas) de la Provincia deben contar con una Junta Departamental de Aguas, integrada por tres miembros, cuyas funciones son:

- a) Fijar el presupuesto anual de conservación, mejoras y limpieza ("monda") de los cauces que existan en el respectivo Departamento y establecer la prorrata con que deben costearlo los concesionarios;
- b) Proponer al ~~SA~~/DH el nombramiento del personal subalterno y supervisar su desempeño.
- c) Vigilar la conservación de canales, desagües y compuertas;
- d) Disponer la distribución del agua por turnos y coordinar la época de limpieza y desembanque de los acueductos;
- e) Ejecutar los trabajos de conservación de acueductos;
- f) Decidir en los conflictos planteados entre comisiones de regantes y en los recursos interpuestos contra sus decisiones.
- g) "Intervenir", esto es, desplazar temporalmente, las comisiones de regantes, con autorización del Consejo.

79. Las comisiones regantes se integran por tres miembros electos por los usuarios (uno del curso superior, otro del medio y otro del inferior) y su jurisdicción alcanza a un canal o grupo de canales.

Velan por la conservación de los acueductos y por la distribución del agua. Pueden tomar a su cargo la limpieza de los acueductos sometidos a su jurisdicción cuando así lo disponga la Junta Departamental.

13. San Luis

13. San Luis

La Dirección Provincial de Aguas, (SL/DPA), dependiente del Ministerio de Hacienda, Economía y Obras Públicas, es la autoridad de aplicación de la Ley de Aguas y la responsable del manejo de los recursos hídricos. No es autárquica y sus decisiones son recurribles ante el P.E. y, por vía contenciosoadministrativa, caso ocurrente, ante el Superior Tribunal de Justicia. Se justificaría reconocerle plena autarquía, para emanciparla de influencias políticas partidistas, y para reafirmar su autarquía patrimonial. El ejemplo, exitoso, de Mendoza, funda plenamente esta recomendación.

La Ley de Aguas (art. 7,41) define minuciosamente su responsabilidades, comprensivas de todos los usos del agua, y no solamente del riego, incluyendo, catastro y registro de aguas y derechos a ellas, estudios agronómicos, pr

programación del servicio de agua potable, uso hidroeléctrico, drenaje, control de inundaciones. Como autoridad de policía hídrica puede imponer multas. Es, en el papel, una verdadera "autoridad de aguas". Lamentablemente no se la ha dotado en los medios humanos y materiales necesarios para que cumpla cabalmente todas esas funciones.

Un cierto grado de descentralización territorial le ha sido autorizado por el Decreto Reglamentario de la Ley de Aguas (art. 111) que le permite delegar parte de sus atribuciones en los "intendentes de riego" que son funcionarios suyos, delegados para el manejo de las aguas en las diferentes áreas que ella administra. Hay 4 Intendencias en: Merlo, Luján, Quines y San Pablo. El personal que de éstas depende puede ser destituido por los intendentes, y el nuevo debe ser designado por SL/DPA a propuesta en terna de la "comisión de Regantes" de que se trata más adelante. Si bien no es encargada de la recaudación del canon de riego ni de las multas (que sólo ella impone, art. 183 de la ley) esos recursos forman, con otros, el Fondo Hidráulico, manejado por una cuenta bancaria especial, sobre la que ella puede girar (Decr. Regl., art. 113), con sujeción a la Ley de Contabilidad y a la previa aprobación de su Presupuesto Anual por el P.E. Puede promover la formación de consorcios de usuarios para hacer obras que interesen en común (Dec. Regl. art. 65).

El procedimiento ante ella está reglado (es el mismo que rige toda actuación ante la Administración Pública: D.SL/567 (1944) y art. 200 de la Ley de Aguas y está obligada a expedirse en 60 días (art. 13 del Dec. Regl.) lo que es un principio de garantía para los administrados, contra el silencio o pasividad de la administración.

La información de que dispone para sus trabajos, tanto de ingeniería como de programación económica, no es satisfactoria.

En materia de aguas subterráneas controla 66 perforaciones "habilitadas", de las cuales posee la siguiente información: profundidad, caudal en litros por hora, nivel piezométrico, depresión de la napa y equipo utilizado. Es presumible que exista mucha mayor cantidad de pozos, registrados o no no obstante que normas ya comentadas de la Ley de Aguas obligan

/ En la obra del CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES, Recursos hidráulicos subterráneos (t. V. vol.2 de la serie: "Evaluación de los recursos naturales de la Argentina, la. parte"), cuadro de pág. 681, se da información de 295 pozos perforados en la Provincia de San Luis, de los cuales 76 fueron "rellenados" y sobre 21 de los cuales no se posee información.

no obstante que normas ya comentadas de la Ley de Aguas obligan al registro de todos los pozos.

El personal de SL/DPA, según su Presupuesto, era en mayo de 1962 de 446 personas, y efectivo de 430. Es decir, a razón de 1 empleado por cada 24 há por ellos administradas, y de 1 empleado por cada 9 regantes, índices que no son muy satisfactorios.

La Nación construyó, bajo su ley N/6546, y en virtud de que San Luis adhirió a ella en 1909 por su ley SL/383, dos sistemas de riego: en Mercedes y Santa Rosa, que riegan, respectivamente 5 767 y 2 422 ha (total 8 189 há). De tal modo la administración de aguas en la Provincia de San Luis, está compartida con la Nación (actualmente por intermedio de N/AEE) como sigue:

1. riego bajo administración provincial (SL/DPA)	10 425 há (56.1 por ciento)
2. riego bajo administración federal (N/A y EE)	<u>8 189 há (43.9 por ciento)</u>
Totales	<u>18 614 há (100.0 por ciento)</u>

Según la ley 6546 y dichos convenios N/AEE expide "Reglamentos" que presiden la distribución de las aguas mientras dura su administración. En cada una de las dos áreas indicadas, N/AEE mantiene una Intendencia de Riego. Es de hacer notar que N/AEE se limita a definir el ámbito geográfico de influencia de cada obra o sistema que administra, con lo que todas las propiedades inmuebles que quedan dentro de él adquieren no sólo derecho de recibir riego, sino obligación de pagar el canon, aunque no rieguen. Pero bajo el sistema legal que N/AEE aplica, ella no otorga propiamente concesiones, ni las registra como tales: se limita a formar un padrón para cada Intendencia de Riego, que es a la vez de regantes y de contribuyentes, con finalidad técnica de distribución del agua, y tributaria, pero no jurídica. De ahí que haya usuarios que reciben agua, o que la pagan, (que deberían ser "concesionarios" y no lo son), inclusive contra su voluntad.

Es preciso hacer notar también que sobre dos ríos, por lo menos, concurren la administración federal y la provincial: el Conlara (donde N/AEE administra el sistema de Santa Rosa) y el Quinto (donde N/AEE administra el de Mercedes). Sobre ambas cuencas coexisten sistemas administrados o controlados por SL/DPA, y, todavía, en su lugar, subsisten administraciones municipales. Ninguna programación eficiente del desarrollo de una cuenca es posible si ella está dividida bajo dos administraciones no vinculadas entre sí, y bajo un criterio de división que no responde a motivos geográficos o físicos.

La legislación de San Luis ha intentado, para dos problemas, hacer participar a los regantes en la administración de las aguas: para el manejo de los canales secundarios de riego (que dicha legislación llama "hijuelas") y para el de los pozos de aguas subterráneas de servicio público o colectivo.

Para los canales el D.SL/257 (1962) organiza las "Comisiones de Regantes. Debe haber una para cada zona bajo riego, y deben ser integradas por 6 titulares y 6 suplentes, electos por los usuarios empadronados (esto es, por los concesionarios o "autorizados"). Donde sea posible, a base de que los regantes del curso superior escojan 2, los del tramo medio del sistema otros 2, y los del curso inferior también 2. Deben residir en el lugar y no ser empleados de SL/DPA. Sus funciones son ad honorem, y duran 2 años, siendo reelegibles sino después de un período. SL/DPA debe promover y organizar los comicios. El voto es obligatorio y secreto, y cada regante tiene un voto, cualquiera sea la extensión de su concesión. Si no concurren más de la mitad de los inscritos la elección se anula. Deben ser elegidos Presidente y Secretario los candidatos más votados. Cada Comisión debe sesionar bimensualmente, y sus facultades, harto limitadas, son: a) proponer a SL/DPA, de acuerdo con el Intendente de Riego de la zona, ternas para el nombramiento del personal obrero de las obras y servicios de riego: b) recomendar a SL/DPA la oportunidad y modo de hacer la limpieza de los canales, y asignar cupos entre los usuarios; c) proponer al SL/DPA la construcción de las obras que estime de interés general.

El régimen descrito sustituyó al que se implantó por el DL.SL/61 (1956), que en la práctica no funcionó. El corto tiempo que lleva vigente el examinado, no permite todavía formar juicio sobre su resultado. Adviértase que las funciones de las comisiones que crea son meramente consultivas, y que no intervienen para nada en el control de los presupuestos de gastos que conciernen a los regantes del área respectiva. En general, la inexistencia de una "conciencia de regantes" en San Luis, hace difícil a SL/DPA obtener el interés de éstos en participar en la administración de los canales de que se sirven. Quizá por que como

que se sirven. Quizá porque como SL/DPA hace los servicios y les cobra bastante menos de lo que cuestan, los regantes no tienen interés en asumir ellos su administración.

Para el ~~mantenimiento~~ y manejo de pozos y molinos públicos que alumbran aguas subterráneas "construidos por SL/DPA" el DL.SL/945 (1962) establece un régimen orgánico de "Comisiones Vecinales de Vigilancia y Mantenimiento". Estas deben, para ser autorizadas a funcionar y para que tengan derecho a que se les entregue la posesión y manejo del respectivo pozo: a) probar que los interesados han comprometido una contribución mensual mínima de \$ 50000 en los pozos con bombas accionadas a motor, y de \$ 3 500 en aquellos donde se bombea con molino de viento; b) llevar un libro de control de la producción del pozo y al var a SL/DPA, diariamente, un parte informativo; c) designar un encargado del pozo, que lo atienda durante un mínimo de 6 horas diarias. Las reparaciones mecánicas son por cuenta de SL/DPA. Según el Reglamento de la legislación recién comentada las comisiones se componen de 3 miembros: Presidente, Secretario y Tesorero que deben ser, electos "por aclamación" (sic) por un año, de una lista que se confeccionará con los ~~vecinos~~ interesados en la zona, que se inscriban. La Comisión ~~administra~~ y maneja el pozo, y debe recaudar mensualmente la suma necesaria, entre los interesados inscritos, manteniendo la suma necesaria, entre los interesados inscritos, manteniendo en reserva el depósito inicial mínimo arriba detallado. Estos pozos tiene por objeto abastecer de agua potable a pequeños pueblos, y suministrar agua para abrevado de ganado criado en sus regiones aledañas.

14. Provincia de Santa Cruz

No ha organizado todavía ninguna autoridad hídrica.

15. Provincia de Santiago del Estero

87. Los órganos responsables de la administración hídrica son: la ST/DGH, que tiene a su cargo el abastecimiento de agua a poblaciones en concurrencia con N/OSN y que también debe manejar las obras hídricas, otorgar concesiones para uso industrial y construir defensas.

88. La SE/DGR en cambio, se ocupa del uso agropecuario. La Dirección de Energía, creada por la ley de presupuesto para 1959; presumiblemente será la autoridad de aplicación del sector del Código de Aguas relativo al

aprovechamiento hidroeléctrico. La SE/DV tiene a su cargo la conservación y vigilancia de los abrebaderos de ganados. La Dirección de Agricultura ejerce la policía de la pesca. N/AEE ha construido el dique Los Quiroga y sus canales derivadores y está construyendo el dique frontal de Río Hondo.

89. Esta provincia integra el IP/OIANA y la IP/CIACSE.

90. El Código de Aguas (1950) prevé la participación de los usuarios en el manejo de las aguas a través de un consejo asesor de irrigación de cinco miembros elegidos por los mismos. Ese Consejo debería integrar mediante la incorporación del Jefe del Departamento de Explotación y del Director General del Agua - cargos que el Código crea dentro de la Dirección General del Agua - la Junta Superior de Irrigación, máxima autoridad en la materia en la Provincia. Tales disposiciones no se cumplen.

91. La estructura administrativa descrita sugiere el comentario siguiente:

- a) la administración del agua incumbe simultáneamente a diversas agencias cuya autarquía, facilidades para la promoción de sus planes y límites de sus atribuciones no están suficientemente aseguradas o definidas.
- b) La extraordinaria participación que en la letra de la ley se da a los usuarios en la Junta Superior de Irrigación nunca integrada contrasta con la nula intervención que se les atribuye en etapas más modestas de la explotación hídrica, como es la administración de hijuelas y canales;
- c) El carácter interprovincial de los ríos santiagueños y su situación de provincia de aguas abajo en la mayoría de ellos, hacen aconsejable se procure una reactivación y fortalecimiento de los organismos hídricos interjurisdiccionales que integra.

16. Provincia de Tucumán

92. También en esta Provincia intervienen en el manejo del agua diversos organismos: el abastecimiento de poblaciones está a cargo de la TM/DHP y N/OSN; el riego y drenaje de TM/DGI; pero la construcción de obras y el uso industrial atañen al TM/DHP; la generación hidroeléctrica está a cargo de N/AEEY; la policía de la pesca compete a la Dirección de Piscicultura.

La provincia integra la IP/OIANA.

93. La autoridad máxima del TM/DGI es la Junta Superior de Irrigación, integrada por un Superintendente designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, por tres años, reelegible, y dos vocales.

Tiene a su cargo la administración general de las aguas y resuelve todas las cuestiones que se susciten entre particulares y las autoridades hídricas inferiores.

94. A los fines administrativos, la provincia está dividida en zonas, administradas por sub-delegados de la Junta, designados por el Poder Ejecutivo a propuesta de ésta.

95. Cada río o arroyo está administrado por un compartidor, designado del mismo modo que los subdelegados.

96. Los canales derivadores son administrados por una comisión integrada por un Inspector y tres delegados, elegidos todos por los regantes.

El Inspector actúa como juez de aguas, con recurso ante el Subdelegado, de quien puede recurrirse ante la Junta Superior. Además el Inspector fija las prorratas, requiere el suministro de peones y deslinda los cupos para la conservación de canales.

17. Provincia de Buenos Aires ~~Provincia de Buenos Aires~~ ✓

97. Diversos organismos se ocupan del manejo de los recursos hídricos de esta Provincia.

La PBA/DH tiene a su cargo lo relativo a administración del agua para riego y drenaje dragado de canales navegables, defensa contra inundaciones y crecidas y aguas subterráneas. Depende del Ministerio de Obras Públicas.

98. Sin haber sido totalmente excluida en el curso bonaerense del río Colorado, las funciones de la PBA/DA están subordinadas a otro organismo autárquico de ámbito regional y fines múltiples, creado por L.PBA/6245 (1960): PBA/CORFO.

La finalidad es promover el desarrollo integral de la zona bonaerense de influencia del río Colorado, cuyos límites debe determinar el Poder Ejecutivo.

✓ La información de que se ha dispuesto es incompleta por no haber sido posible obtenerla de fuente oficial.

- a) De gestión. A tal fin tiene las siguientes funciones estudiar, proyectar, ejecutar y explotar las obras de canalización que permitan el mejor aprovechamiento del caudal del río; realizar o promover la colonización de tierras; levantar el mapa topográfico y edafológico; proyectar y ejecutar obras de defensa contra inundaciones y de protección de las aguas contra la contaminación; crear, participar o fomentar la instalación de plantas industriales y entidades comerciales, de transporte y de toda actividad que contribuya a la transformación y distribución de los productos de la zona: promover o ejecutar planes de forestación integral; facilitar la comercialización de los bienes producidos, preferentemente con intervención de los propios productores y a través de cooperativas o creando mercados; promover o ejecutar la electrificación y la distribución adecuada de energía; cooperar en el mejoramiento de la red vial y varias otras que no se enumeran por razones de brevedad;
- b) de autoridad. Su directorio está facultado para distribuir, explotar, adquirir, vender, dar en arrendamiento, usufructo o comodato, no sólo los bienes de su propiedad privada, sino también el agua pública y la energía de servicio público de la zona. Si bien la ley comentada omite citar las instituciones de derecho administrativo que PBA/CORFO puede emplear para otorgar a los particulares el uso y goce de bienes del dominio público, debe entenderse que está facultada para otorgar concesiones y permisos, y que a falta de un régimen legal de excepción debe aplicar los preceptos de la L.PBA/5262 (1948). La creación de PBA/CORFO produjo, en su área, una superposición de funciones con la PBA/DH, que parece debe resolverse a favor de la primera, porque toda ley posterior deroga a las anteriores. Tal incertidumbre jurídica debe ser eliminada por una disposición aclaratoria.
- Otra facultad atribuida a PBA/CORFO, que merece una especial mención es la de determinar el uso apropiado de la tierra agrícola y del agua, y de adoptar las medidas conducentes a prevenir y combatir la erosión, degradación y agotamiento de la tierra y a conservar su fertilidad. No especifica la ley de qué medios puede valerse

PBA/CORFO para cumplir este mandato. No dice si debe únicamente "indicar" y difundir mediante una labor de extensión, cuál debe ser el uso apropiado, o si está autorizada a imponerlo coactivamente. Tampoco aclara si la obligación afecta a las tierras y aguas que conceda PBA/CORFO o también a otras. Por lo tanto, falta definir y complementar el mandato legal para que adquiera vigencia práctica.

PBA/PBA/CORFO fija los cánones y tarifas que deben pagar los usuarios por los servicios que preste, de acuerdo a las normas que dicte el Poder Ejecutivo. Se advierte la falta de intervención de los usuarios en la determinación de tales tarifas y cánones;

- c) de programación. Debe planificar el desarrollo integral del valle bonaerense del río Colorado. Pero no prevé la ley los medios de ejecución de los planes.

De un modo muy limitado contempla esta ley la coordinación de la actividad de PBA/CORFO con la acción de otras provincias para el aprovechamiento conjunto del río en el que todas tienen intereses. La ley comentada ~~autoriza~~ a PBA/CORFO a celebrar convenios "ad referendum" del Poder Ejecutivo, con entidades similares que se constituyen en otras provincias para la formación de una agencia interprovincial cuyo objeto sea la realización de las obras tendientes al mejor aprovechamiento y distribución de las aguas del río Colorado. Con esta definición la ley comentada limita las posibilidades de constituir una agencia interprovincial a la alternativa descrita. Si bien los usuarios no están directamente representados en el organismo en la composición de su Directorio se registra una considerable influencia del sector privado. Lo forman un Presidente y dos vocales designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, y dos vocales designados por el Poder Ejecutivo a propuesta en terna de las entidades privadas de la zona vinculadas a la finalidades del organismo. Deben tener capacidad y conocimiento de los problemas que la Corporación debe resolver, duran cuatro años, son inamovibles mientras dure su buena conducta y pueden ser reelectos.

Los órganos de PBA/CORFO son: el Directorio, el Presidente y el Gerente General. Debe prestarle asesoramiento una Comisión designada por el Poder Ejecutivo a propuesta de la Universidad Nacional del Sur, del Instituto Nacional de Tecnología Aeropecuaria, de las municipalidades de Patagones y de Villarino, de las asociaciones rurales, de las cooperativas agrarias, de las asociaciones de arrendatarios, de las asociaciones de industriales y de las asociaciones de comerciantes.

Sus planes de acción, presupuesto y programa de explotación requieren aprobación del Poder Ejecutivo y deben ser puestos en conocimiento de la Legislatura.

La Contaduría General de la Provincia debe ejercer, mediante el procedimiento de auditoría contable, el contralor de la PBA/CORFO en los aspectos financieros de su manejo patrimonial.

99. Otros organismos bonaerenses responsables del manejo de los recursos hídricos son la PBA/DEBA creada por DL.PBA/21202 (1957), la Dirección de Obras Sanitarias, el Departamento de Caza y Pesca, creado por D.PBA/8162 (1945) y también la Dirección de Geodesia, que por mandato del DL.PBA/4561 (1957), tiene a su carga el otorgamiento de permisos para extracción de arena y pedregullo en los ríos y mares provinciales y la policía de tal actividad.

18. Provincia de ~~Salta~~ Provincia de Corrientes

100. Su Código Rural (1902) atribuye la competencia para el otorgamiento de concesiones, en los casos en que un curso de agua nazca y muera dentro de un mismo municipio, a la Municipalidad respectiva. En los demás casos es competente el Gobierno Provincial. Las Municipalidades ejercen asimismo la policía de las aguas privadas.

Contra las resoluciones de las municipalidades el Código otorga un recurso contencioso-administrativo, ante un Juzgado de Primer Instancia. En caso de ser denegatoria la resolución de éste, es recurrible para ante el tribunal superior. Contra las resoluciones de la Autoridad Administrativa otorga también recurso contencioso-administrativo.

Este Código establece pues claramente la competencia del poder judicial en materia de aguas.

Esta Provincia carece de una agencia definitivamente responsable del manejo del agua y de una acción defensiva contra sus efectos nocivos, tan graves en ella.

19. Provincia del Chaco

No ha organizado todavía su autoridad hídrica.

20. Provincia de Entre Ríos

101. Su Código Rural reparte también entre las Municipalidades y el Poder Ejecutivo el ejercicio de la autoridad en materia de aguas. El D.ER/4390 (1944), delegaba algunas funciones en la Dirección General de Obras Públicas y Vialidad, organismo sustituido hoy por ER/OSH pero exige el dictado de ley especial para las concesiones superiores a 500 hectáreas y reserva otras facultades al Poder Ejecutivo. Es indudable que no puede el Poder Ejecutivo modificar el Código Rural cercenando atribuciones que éste reconoce a los municipios, y que también puede devolver al Poder Legislativo facultades que éste le delegara al sancionarlo. Por ello se impone una convalidación legislativa del D.ER/4390 (1944), la que daría oportunidad para mejorarlo y completarlo aprovechando la experiencia recogida en 20 años de su vigencia.

102. Para el fomento de la zona entrerriana isleña del Delta del Paraná se dictó el DL.ER/377 (1958) que crea los consorcios vecinales isleños. Estos son organismos formados por grupos de por lo menos diez isleños, para la ejecución de obras de beneficio común. Su decreto reglamentario, D.ER/418 (1959) establece el régimen de funcionamiento y administración de los consorcios y determina que los aportes de los consorcistas se efectuarán en efectivo, en especie, o en trabajos.

Un Consejo Mixto de Asesoramiento del Delta Entrerriano fue creado por L.ER/4125 (1958).

21. Provincia de Formosa

22. Provincia de Misiones

No han organizado todavía sus autoridades hídricas.

23. Provincia de Santa Fe

103. Los órganos responsables de la administración hídrica en la Provincia son: la SF/DGH, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, responsable principalmente del problema del control de inundaciones y del drenaje de zonas inundables. Sólo recientemente ha empezado a ocuparse de provisión de agua potable a pequeñas poblaciones.

La Dirección de Pesca se ocupa, eficientemente, del uso piscícola.

24. Territorio Nacional de Tierra del Fuego

104. El Código Rural por los Territorios Nacionales (1894) otorga al Gobernador del Territorio, mientras no se cree el cargo de Inspector de Agricultura, la facultad de velar por el orden, economía y equitativa distribución de las aguas de riego, dictar ordenanzas reglamentarias, solicitar del Gobierno Federal los fondos y medidas necesarias para desecar pantanos y formar represas o pozos en las inmediaciones de los caminos que carezcan de agua potable, conceder el aprovechamiento de las aguas, fijar tarifas (que debe homologar el Poder Ejecutivo) y percibir las.

Los jueces de aguas deben ser elegidos por mayoría de votos de los regantes de cada acueducto y son los jefes inmediatos de los canales. Deciden con recurso ante el Gobernador o Inspector de Agricultura, ex equo et bono, las cuestiones que se susciten entre los regantes.

105. En los Territorios se produjo el caso de que las propiedades servidas por obras hidráulicas construidas por la Nación (ex-NDGC, actualmente N/AEE) estaban registradas en una agencia y bajo control de ésta, en tanto que los usos hechos con obras construidas por los propios usuarios estaban bajo una autoridad concedente y regulatoria distante: la "Inspección de Agricultura" ejercida por los Gobernadores de Territorios o el Ministerio del Interior y ~~así~~ bajo regímenes legales diferentes pues estos últimos aplicaban el Código Rural o sus propios decretos y la ex N/DGI hoy N/AEE aplicaban y se rigen por la L.N/6546 y Reglamentos en virtud de ella expedidos.

Ese no es, pero puede llegar a serlo, el caso de Tierra del Fuego, donde no existen por el momento problemas conflictivos sobre el uso de las aguas.